Los ciudadanos y el Estado de Bienestar

Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX

Patricia Alvarenga Venutolo

EDITORIAL UCR

Serie
Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

14

Los ciudadanos y el Estado de Bienestar

Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

EDITORIAL
UCR
Ejemplar sin
valor comercial

EDITORIAL
UCR
#QuedateEnCasa

Universidad de Costa Rica
Escuela de Historia
Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica

Comisión Editorial
Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica

M.Sc. Ana María Botey Sobrado
M.Sc. Manuel Calderón Hernández
Licda. Ana Cecilia Román Trigo

Los ciudadanos y el Estado de Bienestar

Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX

Patricia Alvarenga Venutolo

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

EDITORIAL UCR
2015

Serie
Cuadernos de Historia de las Instituciones de Costa Rica

14

323.042
A445c Alvarenga Venutolo, Ana Patricia, 1957-
Los ciudadanos y el Estado de Bienestar : Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX / Patricia Alvarenga Venutolo. – 1.ª ed., 2.ª reimp. – San José, C.R. : EUCR, 2015.
75 p. – (Cuadernos de Historia de las instituciones de Costa Rica; 14)

ISBN 978-9977-67-940-2

1. MOVIMIENTOS SOCIALES. 2. LUCHAS SOCIALES. 3. CRISIS ECONÓMICAS. 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. I. Título. II. Serie.

CIP/2827
CC/SIBDI.UCR

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

Edición aprobada por la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica.
Primera edición: 2005.
Segunda reimpresión: 2015.

Editorial UCR es miembro del Sistema de Editoriales Universitarias de Centroamérica (SEDUCA), perteneciente al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

La forma y el contenido de esta edición son responsabilidad exclusiva de la Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica.

Diseño de portada: *Everlyn Sanabria R.*

© Editorial de la Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Costa Rica.

Apdo. 11501-2060 • Tel.: 2511 5310 • Fax: 2511 5257
administracion.siedin@ucr.ac.cr • www.editorial.ucr.ac.cr
Prohibida la reproducción total o parcial. Todos los derechos reservados. Hecho el depósito de ley.

Impreso bajo demanda en la Sección de Impresión del SIEDIN. Fecha de aparición: mayo, 2015.
Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

ÍNDICE

Introducción 1

Las organizaciones comunitarias 5

La Alianza de Mujeres Costarricenses en la formación de la ciudadanía femenina 13

Las movilizaciones ciudadanas 18

Las protestas contra el incremento de la electricidad (décadas de 1950 y 1960) 21

Las protestas por el agua en el proceso de centralización del Estado 29

Los ciudadanos se enfrentan a los empresarios de autobuses 35

1983: una lucha de alcance nacional 39

La movilización ciudadana del año 2000 50

Conclusiones 60

Notas 63

Acerca de la autora 77

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

EDITORIAL
UCR
Ejemplar sin
valor comercial

EDITORIAL
UCR
#QuedateEnCasa

Los ciudadanos y el Estado de bienestar

Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX[1]

Patricia Alvarenga Venutolo

INTRODUCCIÓN

Este artículo explora la relación entre los ciudadanos y el Estado durante un período de la historia de Costa Rica caracterizado por la presencia creciente del Estado en la vida cotidiana de la población. Interesa dilucidar las acciones de la ciudadanía ante las iniciativas del Estado interventor. Por ello, las siguientes páginas privilegian la organización de la ciudadanía que se propone ofrecer soluciones alternativas a los problemas vecinales y regionales, o bien retar al Estado, rebelándose ante políticas que considera que le son perjudiciales. Se privilegian los servicios públicos: agua, luz y transporte de personas, pues estos constituyen un área sensible de negociación entre el Estado y la población. Se ha escogido el concepto "ciudadanía" para referirse a los participantes en las organizaciones paralelas o alternativas al Estado porque se refiere a la identidad política compartida por un conjunto social que ha desarrollado históricamente mecanismos de alianza, adaptación y resistencia frente a las políticas estatales. Se trata de grupos cuya composición social puede ser radicalmente distinta en las movilizaciones, que tienen finalidades similares pero que se desarrollan en ámbitos políticos particulares. Por tanto, no es posible definir a

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

priori a qué grupos sociales pertenecen los ciudadanos que participan en las organizaciones y movilizaciones, pues ello depende del proceso histórico concreto en estudio. En trabajos recientes se ha venido empleando el concepto ciudadanía para enfatizar la dimensión política de la sociedad. Es decir, de acuerdo con la teoría social la vida política no es un simple resultado de adscripciones a partidos o ideologías y por ello es necesario desentrañar la construcción de las identidades en las diversas formas de negociación y protesta ensayadas por la sociedad. Estas, al generar patrones comunes, contribuyen a la formación de las culturas políticas. De tal forma, como sostiene Alain Touraine, la democracia no la define la simple presencia de masas humanas, sino "la libertad, la creatividad de los individuos y los grupos."[2] Hasta ahora los estudios sobre el estado de bienestar se centran en las políticas públicas mientras la ciudadanía ha sido construida como un ente pasivo que se limita a recibir los beneficios de las instituciones gubernamentales en proceso de conformación y expansión. En las siguientes páginas se demuestra que los ciudadanos tuvieron un importante papel, contestando las medidas del Estado y, también, obligando a sus instituciones a rectificar sus políticas. La expansión del Estado no fue siempre aceptada como inevitable y necesaria.[3]

Norberto Lechner sostiene que en América Latina se ha constituido un concepto de ciudadanía que no gira alrededor de la lucha por derechos civiles, sino más bien de la lucha por acceder a las necesidades básicas.[4] De tal forma, en el subcontinente encontramos a los marginados, irrumpiendo en el espacio público en busca de una vivienda decente y, en los ochentas, las mujeres se convierten en actoras de primera plana en la organización comunal en aras de crear estrategias de sobrevivencia. Junto a las movilizaciones sindicales, particularmente visibilizadas por los estudiosos de la sociedad, aquellas por la vivienda y por la tierra tuvieron gran importancia en la Costa Rica del estado benefactor.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

Sin embargo, este artículo enfatiza en las movilizaciones relacionadas con los servicios públicos, pues constituyen una historia muy marginalmente explorada por los investigadores sociales pese a que ha sido central en el desarrollo de la cultura política ciudadana.

En las siguientes páginas el lector podrá apreciar que las movilizaciones a favor de la estatización de la distribución de la electricidad, en contra de la centralización del servicio de electricidad y del agua y aquellas que propusieron la municipalización del servicio privado de buses, no por casualidad ocurrieron en contextos de incrementos de precios de estos servicios. Es innegable que la oposición a la privatización de los servicios de electricidad y teléfono, que generó una lucha cívica de grandes proporciones en el 2000, está relacionada con el temor ciudadano de perder la capacidad de negociación de precios de estos servicios públicos básicos.

E.P. Thompson, junto con otros historiadores considerados humanistas-socialistas, ha enfatizado el papel de la experiencia en la conformación de una cultura de resistencia de las clases subalternas con el fin de superar la visión "estructural" de los movimientos sociales, ingresando a las formas particulares en que sus integrantes experimentan a través de su cultura las vivencias históricas. De tal forma, se retoma el concepto "experiencia" de Thompson, que se propone clarificar no solo la vivencia histórica particular de un determinado grupo social, sino, especialmente, la forma en que este grupo, a través de su instrumental cultural, dota de sentido a dicha experiencia.[5] Las luchas en defensa de los precios de los servicios públicos podrían parecer poco importantes, pues se tratan de "negociaciones de centavos" con el Estado. No obstante, desde la óptica de la percepción de los sectores subalternos de los poderes públicos, así como del significado que colectivamente otorgan esas "medidas de fuerza" con dichas instituciones estatales, es posible situar tales disputas en una dimensión cultural.

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

La importancia que tuvo la izquierda, especialmente aquella concentrada en la agrupación de este tipo de mayor trayectoria nacional: el Partido Vanguardia Popular, en el liderazgo de movimientos comunitarios de vecinos y de la mayor parte de las movilizaciones contestarias, obliga a reflexionar sobre la interacción de sus líderes con la ciudadanía. En estas páginas no se realiza un estudio institucional de la izquierda, sino más bien se intenta develar su práctica política para dialogar con una ciudadanía que no necesariamente militaba en la izquierda, pero que en ciertas coyunturas, si los líderes de base del partido sabían dialogar con ella, podían integrarla a movilizaciones ciudadanas.

Este artículo se propone visibilizar la participación femenina no solo señalando que las mujeres tuvieron presencia en los actos públicos de rebeldía, sino especialmente mostrando cómo, a nivel simbólico, es decir, cultural, se construyó la imagen de la mujer ciudadana. Efectivamente los estudios de la primera mitad del siglo XX han mostrado la participación de las mujeres en las luchas sociales del período. No obstante, solo a partir de 1949 la ciudadanía femenina es explícitamente reconocida por el Estado. Gracias a la culminación de varias décadas de lucha por el sufragio femenino, las mujeres obtienen el derecho a participar en el ritual que integra al individuo a la vida política. Entonces, los partidos políticos ensayan un proceso sostenido de creación de la ciudadanía femenina, proceso que se analiza desde el prisma de la izquierda tradicional, que lideró total o parcialmente las protestas sociales expuestas en las siguientes páginas.

Si bien este texto se centra en el período del estado de bienestar, la protesta contra la privatización encubierta del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha posibilitado analizar esta movilización en perspectiva histórica, es decir, visualizar cómo la tradición de lucha se ha conservado, modificado o transformado para responder a nuevos retos sociales.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Editorial UCR Ejemplar sin valor comercial

LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

En las décadas estudiadas la sociedad costarricense sufre importantes transformaciones. Una de las más importantes la constituye el crecimiento de las ciudades. El desarrollo industrial a partir de los sesentas, vinculado a la integración de Costa Rica en el Mercado Común Centroamericano, junto al rápido proceso de expulsión del campesinado empobrecido, promovieron el desarrollo de los centros urbanos. Afirma José Manuel Cerdas que, entre 1927 y 1963, la ciudad capital duplica el número de sus habitantes. Este crecimiento no es homogéneo, se concentra en los barrios pobres, especialmente, en el área urbana más dinámica localizada hacia el sur de la capital. Así, por ejemplo, la población de Hatillo se cuadruplica en el corto lapso de 13 años (entre 1950 y 1963).[6]

Este fenómeno de expansión urbana estuvo acompañado del crecimiento del Estado costarricense que a partir de los sesenta, fortalece y crea instituciones que afectan directamente la vida de los costarricenses. La Caja Costarricense de Seguro Social lleva sus servicios a las diversas regiones que componen el territorio nacional. El Consejo Nacional de Producción, fundado en 1965, juega un papel central en la regulación de precios al consumidor de los productos que forman parte de la canasta básica, mientras ofrece subsidios a los productores. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), creado en 1949, también tiene un rápido desarrollo, brindando servicios de electricidad y telecomunicaciones a precios razonables y aun en regiones que serían poco atractivas para empresas privadas análogas. El Instituto de Tierras y Colonizaciones (ITCO) se crea en 1961, en el contexto de la expansión de los latifundios, para aliviar el problema de distribución de la tierra. El Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), fundado en 1954, tiene como finalidad resolver el serio problema de vivienda que se presenta en las zonas urbanas. Mediante el Sistema Nacional de Acueductos y

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

Alcantarillados (SNAA) a inicios de los años sesentas, el deficiente servicio de agua en manos de la municipalidad es centralizado. Esta expansión de instituciones públicas estuvo acompañada por un proceso de centralización que debilitó el poder local.[7]

Las llamadas Juntas Progresistas, asociaciones de vecinos creadas en las décadas precedentes con el fin de resolver problemas propios de las comunidades, tienen su auge en las décadas de 1950 y 1960. Si bien en las juntas participaron líderes locales provenientes de las distintas tendencias políticas, predominaron los de izquierda.[8] El Partido Vanguardia Popular (PVP) experimentó la severa represión de los primeros años que siguieron a la llamada Revolución del 48. El sindicalismo comunista mantuvo su hegemonía en las zonas bananeras, pero sufrió un fuerte golpe en las áreas urbanas. Sin embargo, la izquierda conservó su influencia entre los grupos subalternos de las ciudades. A partir de 1952, al bajar el tono de la represión, las Juntas Progresistas encontraron espacios para su desarrollo. Mientras dichas asociaciones aprovecharon la experiencia del liderazgo sindical de los cuarentas, por su parte, los activistas de izquierda encontraron en ellas algún espacio para continuar desarrollando su trabajo político. Sin embargo, las Juntas Progresistas, aunque apoyadas e impulsadas desde la izquierda, no fueron simplemente un brazo político de esta. Su liderazgo hizo lo posible por integrar ciudadanos que,por su honorabilidad o por su vocación de servicio a la comunidad, podían constituirse en buenos organizadores. Con esta estrategia también respondieron a los ataques anticomunistas presentando a las Juntas como instituciones compuestas por integrantes de diversas tendencias políticas.[9] Por otra parte, los beneficios obtenidos por las comunidades organizadas impulsaron a ciudadanos que no mantenían vínculos con la izquierda a tomar la iniciativa de crearlas en sus propios barrios y cantones. Las Juntas se extendieron a través del territorio nacional ocupándose de los más diversos problemas que enfrentaba la comunidad:

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

el deterioro de las calles, la construcción de kioskos en las paradas de buses, el servicio de autobuses, el entubamiento de ríos contaminados en el sur de San José (el Ocloro y el María Aguilar), el suministro y precio del agua, la seguridad, la construcción de puentes, escuelas, colegios y los problemas de vivienda y de urbanismo en general.[10] Las pequeñas reivindicaciones, como la construcción de kioskos para los buses y el arreglo de calles, se podían alcanzar con la colaboración del vecindario, sin necesidad de apelar al gobierno. Pero cuando se trataba de la construcción de gimnasios, escuelas, colegios o canchas de futbol, por ejemplo, la estrategia se orientaba especialmente a la búsqueda de la colaboración estatal. La creciente separación del ciudadano de los centros de toma del poder abrió el espacio necesario para que se desarrollaran las Juntas Progresistas como asociaciones que, en alguna medida, permitían a una ciudadanía preocupada por la pérdida de control de su entorno material y humano, recuperar potencialidades para incidir en su mundo.[11]

Con frecuencia las propuestas políticas de las Juntas en las comunidades, lejos de entrar en contradicción con los intereses del Estado, eran más bien complementarias. Estas colaboraron en la formación de una cultura nacional compartida con su labor moralizante, educativa y hasta caritativa. La Junta Progresista de Cinco Esquinas integró a la celebración navideña a los niños pobres entregándoles regalos el día de Navidad.[12] La Junta de Granadilla Norte instalaba basureros "para enseñar a la gente a colocar la basura en su sitio" y, en esta forma, contribuía con la labor civilizatoria del Estado-nación.[13] También esta misma junta se preocupó por el maltrato de menores "en familias muy pobres" para contribuir a la normalización del castigo infantil en la sociedad. Además, incentivó el sentimiento nacionalista en la niñez con la donación a la escuela, a petición de su director, de una bandera de Costa Rica para los actos de conmemoración de la independencia.[14] A través de la promoción del deporte, particularmente del futbol, las Juntas se propusieron contribuir a la

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

creación de diversiones sanas que alejaran a los integrantes de la comunidad del vicio y el delito. De esta forma fueron pieza importante en la construcción de un "lenguaje común" del tiempo de ocio en el país.

En 1967 con la Ley de Desarrollo de la Comunidad N°. 3859 se creó la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), como una "institución encargada de promover y dirigir la organización comunal".[15] En la década de los setentas DINADECO tuvo su período de mayor expansión para entrar en una lenta agonía en la década de 1980, durante la que el neoliberalismo estranguló económicamente las células que lo componían: las Asociaciones de Desarrollo. Las Asociaciones de Desarrollo fueron dotadas para su financiamiento con partidas específicas y un dos por ciento del impuesto sobre la renta que el tributario donaba voluntariamente a la asociación de su preferencia[16] lo que dejaba a las Juntas Progresistas en clara desventaja.

Asegura Jorge Cayetano Mora que DINADECO se convirtió en un instrumento redistributivo del Estado donde el ciudadano perdió protagonismo y se hizo cada vez más dependiente y pasivo.[17] Sin embargo, el liderazgo de izquierda en la época de auge de las Asociaciones no las percibió simplemente como "enemigas", sino más bien encontró en ellas un terreno de disputa. Los partidos políticos visualizaron en las Asociaciones un espacio para establecer vinculaciones con la sociedad civil que redundaría en beneficios electorales. El PVP también entró en esa dinámica política y compitió con los partidos mayoritarios por el control de estas formas organizativas promovidas desde el Estado. La izquierda, que para entonces ya no era monopolio del PVP, en ese proceso de constitución de las Asociaciones Comunales con recursos proveídos por el Estado, vio en ellas una buena oportunidad para afirmar su presencia en la sociedad civil. En los setentas encontramos Asociaciones de Desarrollo liderando protestas comunales en distintas partes del país. Miembros del PVP de Hatillo dieron una intensa lucha

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

con el PLN y lograron mantener posiciones hegemónicas en la Asociación de Desarrollo en un enfrentamiento que, según la líder de base María Isabel Sánchez, fue "a muerte, de movilizar casa por casa."[18] Entonces el gobierno en manos del PLN trató de asfixiarlas negándoles recursos económicos. Sin embargo, los líderes de izquierda en la Asociación de Hatillo se encontraban en una sólida posición, pues habían llevado al éxito la dirección de la lucha contra el alza de tarifas eléctricas que tuvo lugar en 1983. La elección pública de la directiva de las Asociaciones de Desarrollo en cada comunidad abrió el espacio para que la izquierda disputara los puestos de liderazgo con integrantes de los partidos oficiales, aunque en condiciones de desigualdad, pues estos contaban con el apoyo de la maquinaria de gobierno y, lo que es más importante, eran los portadores de los recursos económicos.

Si bien la estrategia estatal de administrar recursos de acuerdo con sus intereses políticos, debilitó la posición de la izquierda, los conflictos que llevarían a la división y decadencia del PVP, tema analizado más adelante, afectarían negativamente su capacidad de incidencia en la sociedad civil y, particularmente, su presencia en las Asociaciones.

En la década de los ochentas las Asociaciones de Desarrollo respondieron a planes específicos del gobierno por lo que fueron perdiendo por completo su autonomía. Así, por ejemplo, sostiene Mora que en la administración Arias "DINADECO y las organizaciones comunales constituyen instrumentos fundamentales para el cumplimiento de la promesa de las 80,000 viviendas."[19] Pero, será la crisis de la izquierda el factor crucial que determinará el triunfo definitivo del Estado sobre las asociaciones comunales alternativas.

En el contexto de la Revolución Cubana surgieron en Costa Rica nuevas agrupaciones de izquierda que disputaron la hegemonía del PVP. Intelectuales radicalizados a raíz de la Revolución Cubana fundaron el Partido Revolucionario Auténtico (PRA),

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Ejemplar sin valor comercial

que luego pasó a denominarse Movimiento de la Nueva República (MNR), así como el Partido Socialista Costarricense (PSC), y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Estas nuevas agrupaciones de izquierda, junto con el PVP, lograron aprovechar el auge del movimiento estudiantil a partir de 1970, año en que ocurrió la más relevante protesta de estudiantes del siglo XX en contra de la ley que permitía a la multinacional ALCOA la explotación de minas de aluminio en el país.

En las elecciones de 1976 y 1980 las principales agrupaciones de izquierda lograron consolidar una alianza electoral con la creación de Pueblo Unido. Pese a que con esta alianza obtuvieron significativos éxitos electorales, a inicios de los ochentas los partidos de izquierda se vieron envueltos en un proceso de desintegración. En 1984 el MRP se dividió, el Frente Popular está en proceso de derechización y el PVP se desintegró, luego de sufrir un profundo cisma. Las razones de la crisis son diversas. Según los analistas de entonces, esta se generó en la incapacidad de la izquierda de constituirse en alternativa política frente a los cambios operados en la sociedad costarricense. Aunado a ello, su rígida cultura política impidió la negociación cuando surgieron divergencias ideológicas, tal como ocurrió con el PVP donde el grupo representado por Manuel Mora, defendiendo un proyecto político que denominó "a la tica", se enfrentó con radicales miembros del partido que defendían la tesis de que ya había llegado el momento de la revolución.[20] Sin embargo, las organizaciones vinculadas a proyectos de izquierda independientes de los partidos vivirán todavía en la segunda mitad de los ochenta, un importante auge, especialmente en los barrios populosos de San José.

Mientras las Juntas Progresistas se encontraban en decadencia, surgieron las organizaciones comunales vinculadas con nuevas asociaciones de izquierda Estas tuvieron un proyecto similar al de las Juntas, pero se diferenciaron de las organizaciones tradicionales de izquierda en que no contaron con una

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Ejemplar sin valor comercial

fuerte y bien establecida estructura partidaria. Si bien realizaron trabajos comunales similares a los de las Juntas, pusieron un énfasis particular en las actividades culturales y deportivas. Ello no solo se debió a una simple cuestión de prioridades. En realidad se trataba de nuevas concepciones filosóficas del trabajo político en las que se privilegiaba el mundo cultural como ámbito dilecto de la lucha de clases y, por tanto, como el terreno necesario de análisis para crear una estrategia revolucionaria. El grupo Guapinol de San Antonio de Belén surgió, en la década de 1970, independiente de partidos políticos e influenciado por la Teología de la Liberación. Dos nuevos partidos de izquierda: el Frente Popular y el Partido Socialista Costarricense compitieron por atraerlo y, finalmente, algunos de sus integrantes, en cuenta nuestro informante Danilo Pérez, se integraron al segundo. No obstante, Guapinol mantuvo su independencia.[21] Pérez resalta la importancia que el grupo concedió a los deportes, particularmente a los alternativos al fútbol.[22] Según la revista *Aportes*, Guapinol buscó el desarrollo de otros deportes para quebrar el monopolio del futbol e integrar a la mujer a la vida deportiva.[23] Las Juntas Progresistas, como lo vimos anteriormente, consideraban el deporte como un mecanismo ideal para cohesionar y atraer a la comunidad.

En cambio, en el caso de Guapinol, este tiene otro fin: a través del deporte y de las diversas actividades culturales la comunidad forja su propia identidad y, por ello, la labor política de la izquierda consiste en contribuir a que, mediante el proceso político, la comunidad resignifique su vida cultural dotándola de contenidos contestatarios. El redescubrir y cultivar las desvalorizadas tradiciones adquirió una importancia central en su proyecto político. Se promovió el teatro popular, en el que los actores eran miembros de las comunidades y las obras, algunas de ellas de creación colectiva, estaban directamente vinculadas con las demandas de los grupos subalternos a nivel local y nacional.[24]

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

Estas organizaciones comunales independientes, predominantes en los años ochentas, se propusieron crear un nuevo proyecto alternativo, donde la cultura popular ocupara un lugar central, es decir, en el que los conceptos abstractos de la vieja izquierda fueran sustituidos por la creación, en el seno de las mismas comunidades, de un discurso coherente con sus particularidades culturales. Asistimos al surgimiento de distintos grupos culturales, especialmente en comunidades de mayor tradición organizativa. Así, por ejemplo, en 1985, se constituyó Tertulia, grupo cultural de Hatillo, que al igual que Guapinol y Mojupa se propuso, a través del rescate de la propia cultura, contribuir a la creación de una identidad compartida entre sus pobladores que potenciara su capacidad organizativa.[25]

Su estrategia política tenía como finalidad, por una parte, crear un proyecto de cambio social en el que los sectores subalternos pudiesen tener protagonismo a través de una reinvención de su herencia cultural y, por otra parte, idear estrategias participativas que dinamizaran a las comunidades a tal punto que dejasen de depender de un liderazgo siempre dispuesto a tomar la iniciativa y a luchar por convencer, puerta por puerta, a los vecinos de la trascendencia de su propuesta. Es decir, la nueva izquierda se proponía contribuir a crear una ciudadanía activa y autónoma cuya participación no respondiera a estímulos coyunturales, sino a un ejercicio cotidiano de lucha en beneficio de sus comunidades. Pero, este auge de organizaciones culturales se vivió en los barrios de mayor tradición de movilización comunal. El movimiento comunitario en la segunda mitad de los ochentas y durante los noventas siguió el ritmo declinante del movimiento social en general.[26] También las Asociaciones de Desarrollo perdieron su dinamismo a finales de los ochentas. En cambio, el Estado, aunque incapaz de resolver los problemas básicos de las comunidades pobres, afirmó su presencia directa con los programas de redistribución de recursos, tales como bonos de vivienda y bonos alimenticios.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

Mediante el control de distribución de beneficios, los agentes estatales desplazaron líderes comunales, contribuyendo así a descabezar el movimiento popular.[27]

LA ALIANZA DE MUJERES COSTARRICENSES EN LA FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA FEMENINA

Esta sección analiza una organización vinculada al PVP, la Alianza de Mujeres Costarricenses (AMC), que surge cuando la mujer obtiene el derecho al voto. Entonces el PVP se orienta a la organización sindical y ciudadana y deposita en la AMC la difícil misión de integrar a las nuevas ciudadanas a las luchas sociales. Las aliancistas en los años cincuentas apoyaron el voto femenino y contribuyeron a la cedulación de las nuevas ciudadanas. Sin embargo, su objetivo central fue la integración de las mujeres a las luchas sindicales, comunales y ciudadanas. Aunque es evidente la relación de la AMC con el PVP, sus integrantes se propusieron unir a las mujeres "sin distingos políticos, religiosos ni sociales". Adoptaron el término "Alianza" con el fin de sugerir que la organización estaba integrada por diversos sectores políticos.[28]

En este apartado se muestra que en la cultura política costarricense de la segunda mitad del siglo XX, el significado de la participación ciudadana es distinto para hombres y mujeres y esta diferenciación reproduce las relaciones patriarcales y limita los campos y formas de acción de las mujeres. La AMC no equiparó la ciudadanía femenina a la masculina. En general, el ciudadano fue concebido como individuo que se suma a las luchas sociales como, valga la redundancia, ser individual, con independencia total de su vida privada. Las referencias al hombre-padre son esporádicas, es decir, no se encuentra encadenado a sus referentes afectivos más cercanos. En cambio, la mujer ciudadana no lo es sin adjetivos. En 1957 las integrantes de la

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Ejemplar sin valor comercial

AMC manifiestan que ellas repudian las luchas fraticidas fomentadas por los intereses electoreros "como madres y ciudadanas", pues "no queremos ver a nuestros esposos, hijos y hermanos enrolados en la tragedia de otra guerra civil."[29] En este texto la maternidad es una característica femenina que precede y, por tanto, condiciona la ciudadanía femenina.

La vinculación mujer-familia y mujer-madre es característica notoria de la AMC. Especialmente en la década del cincuenta, pero también más allá de esta, la ecuación mujer-hogar-ciudadanía resulta indispensable no solo para explicar, sino incluso para justificar la participación femenina en la vida política. En 1958 la AMC reacciona ante una comunicación del *Diario de Costa Rica* que las llamó comunistas, alegando que en su organización participan mujeres de diversas tendencias políticas y, además, se preocupan por justificar su interés en los problemas nacionales, en particular su participación en las luchas por la nacionalización eléctrica, señalando lo siguiente: "porque sabemos que en una u otra forma afectan directamente la suerte de nuestros hogares."[30] En este texto el derecho de la mujer a la participación ciudadana no se refiere a un concepto abstracto de libertad de elección y de participación en la vida política, como sucede en la construcción clásica de la ciudadanía masculina, sino que solo se justifica a partir de la relación existente entre la vida política y el hogar.

Esta concepción de la ciudadanía femenina se encuentra recurrentemente en otros países de América Latina. Señala Lola Luna que, a inicios del siglo XX, desde el Estado se refuerza la maternidad y los elevados valores morales como características centrales de la identidad femenina. Los gobiernos populistas en boga durante la adquisición del derecho al sufragio por parte de la mujer enfatizan el papel de madres y amas de casa de las nuevas ciudadanas. El discurso ideológico maternalista que adquiere importante presencia en los medios de difusión "oscurece la identidad mujer iluminando exclusivamente su

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Ejemplar sin valor comercial

capacidad maternal."[31] En el siglo XIX la mujer es excluida del trabajo productivo gracias a las luchas obreras que posibilitan convertir al hombre en proveedor exclusivo del hogar.[32]

Si bien la izquierda promovía la integración de la mujer al trabajo remunerado y por ello las aliancistas mantuvieron una constante lucha a favor de la creación de guarderías, en 1950, la gran mayoría de las mujeres se encuentran dedicadas exclusivamente al trabajo del hogar.[33] Por ello a corto plazo solo es posible atraerlas al universo de dinamismo social, como en general en América Latina lo proponen los partidos tradicionales, a través de sus relaciones afectivas con hombres como madres, esposas y hermanas. Las aliancistas, como lo hicieran las feministas de la primera mitad del siglo XX, intentan politizar ese mundo estático del hogar, incorporando a sus mujeres a las luchas sociales, pero sin trastocar las relaciones de género. Estas son más bien "naturalizadas", pues las relaciones mujer-hogar, mujer-madre, se presentan como vínculos que trascienden cualquier proyecto político, incluso el que se refiere a la incorporación de la mujer a la vida productiva. De tal forma, se encuentra una constante preocupación por hacer converger las demandas políticas con los intereses de ese núcleo primario al que inevitablemente pertenece la mujer.[34]

Cuando se funda la AMC y en las primeras décadas de su existencia, el sistema patriarcal apenas había empezado a ser cuestionado en el país en relación con temáticas que, a largo plazo, podrían producir transformaciones sustanciales en dichas relaciones. El feminismo costarricense, que alimentó las luchas sufragistas a partir de la década de 1920, efectivamente abogó por el derecho a la participación femenina en la vida política, pero dejó incólumes conceptos básicos en los que se nutrían las relaciones de género. Durante el surgimiento del feminismo y en las décadas siguientes, en la nación costarricense se asiste a la reafirmación de la maternidad como valor primario y esencial de la mujer.[35]

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

Los escasos estudios existentes sobre los discursos relacionados con las identidades genéricas durante el siglo XX, parecen indicar que la retórica de la AMC se ubicó sin contradicciones sustantivas en aquella construida por el feminismo. La concepción de la AMC sobre la mujer no debe analizarse exclusivamente desde la óptica de los discursos vigentes sobre la temática. También es fundamental considerar cómo estos discursos se articularon a su proyecto político. Efectivamente, la directa vinculación de la mujer con la maternidad resultaba para entonces incuestionable. No es hasta las últimas décadas, debido a la creciente importancia de las luchas feministas y, junto con estas, al auge de los estudios de género, que se ha hecho posible empezar a visualizar la maternidad como constructo social.[36]

La concepción tradicional de la maternidad ha sido explotada con la finalidad de legitimar la participación femenina en las luchas sociales. La abnegación de la madre está íntimamente relacionada al estoicismo. La madre posee superioridad moral que la hace acreedora de particular respeto, pues como afirma Sonia Montecino, "lo femenino-madre tiene un correlato poderoso en el universo religioso en donde no es precisamente la figura de Cristo (histórico y masculino) la que domina el culto popular, sino la imagen de María la Madre, la Virgen."[37] Ello contribuye a legitimar la protesta de las madres en la sociedad civil, pues la maternidad expresa abnegación y sufrimiento, lo que la religiosidad integrada al sentido común, interpreta como purificación y, por tanto, superioridad moral.[38]

Las mujeres de la AMC comprendieron las potencialidades políticas de la maternidad y se abocaron a explotarlas: en 1957 organizaron una asamblea de madres que solicita a la CCSS extender el seguro familiar al mayor número posible de hogares. Uno de los titulares que refieren al tema: "Las madres se dirigen a la CCSS", expresa en el término "madre" la fuerte carga de legitimidad de quienes entregan su vida a sus hijos y ese amor, sinónimo de abnegación y sufrimiento, se transforma en

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

una especie particular de sabiduría que les confiere ante la sociedad el derecho a la palabra.[39]

En 1952 las aliancistas apelan a la participación femenina en la lucha contra el alza de las tarifas eléctricas, con el siguiente argumento: "la acción conjunta de todas las mujeres costarricenses puede servir para ayudar a librar de esa nueva carga económica a tantos hogares cuyos escasos presupuestos no alcanzan ni para llenar las más urgentes necesidades diarias."[40] En esta forma se proponen construir una vinculación directa entre el hogar y la vida política, estrategia que posibilita justificar en la sociedad patriarcal la participación femenina en las movilizaciones analizadas en estas páginas, relacionadas con el precio y la calidad de los servicios públicos. Debido a que dichos servicios afectan directamente al hogar, la mujer "naturalmente" es convocada a participar en el espacio público. Es la lucha cotidiana de la mujer pobre y de clase media baja por llenar las necesidades básicas del hogar la que da sentido a la participación política femenina. De tal forma, las mujeres de izquierda reforzaron valores propios de la sociedad patriarcal en aras de encontrar puntos nodales que permitieran amarrar la tradicional identidad femenina con una nueva identidad política de las mujeres. En un contexto donde apenas era aceptable que la mujer votara, mediante la vinculación de la esfera doméstica y el mundo político, las aliancistas justificaron ante la sociedad su proyecto de integración masiva de la mujer a las luchas sociales. Escudriñaron en la cultura propia de las mujeres populares en busca de las necesidades que estas percibían como prioritarias con el fin de convertirlas en objetivos de la lucha política. Las aliancistas, demostrando a las mujeres que ellas eran capaces de incidir positivamente en las condiciones de vida de los suyos, enfrentando y apelando a los representantes del Estado, se propusieron convertirlas en activos sujetos políticos.

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

LAS MOVILIZACIONES CIUDADANAS

Entre los años cincuentas e inicios de los ochentas el país vivió movilizaciones de alcance local, regional e incluso nacional de ciudadanos que protestaron por la calidad y el precio de los servicios públicos. Estas movilizaciones, con frecuencia, fueron alimentadas por las organizaciones comunales. En especial, las Juntas Progresistas, pero también las Asociaciones de Desarrollo se constituyeron en bases organizativas de múltiples luchas populares.[41] Sin embargo, en estas páginas se privilegian aquellas relacionadas con los servicios públicos, las que generaron amplias movilizaciones ciudadanas, convocando a una pluralidad de sectores sociales, aunque mayoritariamente subalternos. Estas luchas eran de carácter "defensivo" en el sentido de que los ciudadanos se enfrentaban al Estado, las municipalidades y las empresas privadas para "defenderse" de lo que consideraban era un comportamiento abusivo de estos poderosos entes. Sin embargo, la rebeldía ciudadana de entonces fue más allá de las simples demandas por mantener precios de servicios accesibles. También en estas el proceso de expansión del Estado constituyó un punto medular en las reivindicaciones demandadas.

En los años cincuentas y sesentas los barrios pobres de San José, en rápido crecimiento, carecen de las condiciones de infraestructura necesaria para ofrecer las condiciones mínimas de vida a su población. Predominan los mesones con patios de vecindad donde las familias alquilan cuartos y comparten lavanderos, excusados y baños comunes ubicados en el patio. Debido a la carencia de viviendas, los rentistas cobraban elevados montos por viviendas que los contemporáneos definían como "inmundos chinchorros." Uno de los problemas más serios de los habitantes citadinos era la carencia de agua potable. Se infiere de la lectura de José Manuel Cerdas que la situación de los barrios pobres sufre notables cambios en la década del

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Ejemplar sin valor comercial

cincuenta gracias a la expansión del servicio de cañería y de alcantarillados. Por ejemplo, en 1963 prácticamente la generalidad de las viviendas de distritos populares como Carmen, Hospital y San Sebastián contaban con cañería.[42] El SNAA se creó con el fin de concentrar los acueductos y alcantarillados del país que se hallaban en manos de las municipalidades. A partir de entonces se expandieron las tuberías en los crecientes barrios josefinos, así como en el resto de las principales ciudades del país. Pero, pese al entubamiento, el servicio de agua continuó siendo deficiente. En abril de 1963, cuando el gobierno central, recientemente ha asumido el control de los acueductos y alcantarillados del país, la Directiva de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas se manifiesta contra el excesivo aumento del agua alegando que hay "gran cantidad de barriadas en San José que viven sin agua" e incluso zonas como el pujante cantón de Desamparados carece de agua.[43] No por casualidad de nuevo en el primer semestre de 1963, se denuncia que en otra zona de la capital, Barrio Bolívar, hace días que no llega una gota de agua.[44]

En 1966, si bien el INVU ha empezado a aliviar el problema de escasez de vivienda para la creciente población de San José, el ritmo de expansión de las viviendas de interés social es bastante inferior a su demanda.[45] Sin embargo, la construcción de viviendas de interés social contribuye, en los sesentas y setentas, a mejorar sustancialmente el nivel de vida de una buena proporción de la población citadina.

La vida cotidiana en la ciudad requería de una serie de gastos en servicios públicos que en el campo o bien no existían o se hacían más esporádicamente. Los habitantes de las barriadas pobres no podían prescindir de electricidad, agua potable y transporte público. La empresa privada, el gobierno central y las municipalidades, por lo menos hasta finales de 1960, se mostraron incapaces de ofrecer un servicio eficiente y, pese a ello, los precios de los servicios tendían a aumentar aceleradamente.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

La creación del ICE en 1949 fue precedida por décadas de protestas nacionalistas en contra del monopolio de la compañía Electric Bond and Share. Sin embargo, 1949 no marcó el fin de esta lucha, pues si bien la generación eléctrica fue asumida por el ICE, la compañía extranjera continuó controlando las líneas de distribución. Según el semanario *Adelante*, medio de comunicación que en los cincuenta tomó la batuta en las luchas contra la empresa extranjera, a través de la distribución, esta adquiría impresionantes ganancias, lo que explicaba los constantes incrementos de precios. En relación con este punto, se debe advertir al lector que no es interés de este trabajo discutir hasta dónde el argumento de la izquierda que culpabilizaba de los incrementos a la empresa transnacional distribuidora de electricidad, era razonable. Preocupa, más bien, resaltar que es precisamente la vinculación entre la pervivencia de la transnacional y la lucha contra los incrementos de precios, lo que permitió construir un discurso nacionalista movilizador de la ciudadanía.

La izquierda renace en los años cincuentas tomando la dirección de las luchas en contra de los aumentos de las tarifas eléctricas que cohesionan a los josefinos, especialmente a aquellos que habitan en las barriadas populares. Las movilizaciones en torno a la electricidad que se desarrollan a inicios de los cincuentas crean una "tradición de protesta social." Toda tradición está sujeta a la permanente reconstitución, pues las formas de la protesta social no permanecen incólumes. La tradición no se limita a "repetir" el aprendizaje adquirido, al contrario, esta es dinámica, es decir, siempre hay posibilidades de ensayar nuevos métodos de lucha, de reconstruir los existentes y de desechar algunos de ellos.[46]

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR Ejemplar sin valor comercial

LAS PROTESTAS CONTRA EL INCREMENTO DE LA ELECTRICIDAD (DÉCADAS DE 1950 Y 1960)

La resistencia organizada contra los aumentos de tarifas surge en los barrios populares. Mediante las Juntas Progresistas se constituyen comités de lucha que se proponen unificar la protesta en el contexto nacional aunque, en realidad, las movilizaciones tienen un carácter, fundamentalmente, josefino, pues solo establecen con el resto de las provincias alianzas coyunturales. En los cincuentas Barrio México (1952) y Barrio Cristo Rey (1957) asumen un papel protagónico y, mediante el trabajo político, logran involucrar en la protesta social al resto de los barrios populares de San José.

El ritual de una asamblea popular realizada en la escuela de la localidad sellaba el compromiso de la colectividad de participar en la protesta y, en el caso de las luchas por las tarifas, se convocaba a la colectividad josefina a sumarse a la protesta. Estas protestas surgen en respuesta de aumentos de tarifas y, por ello, la primera medida que tomaban las asambleas populares era demandar al gobierno la derogación del incremento.[47] Pero, en la década del cincuenta, los dirigentes de izquierda lograron exitosamente vincular las demandas relacionadas con el precio del servicio con la lucha por la nacionalización de las redes de distribución eléctrica. Precisamente con la bandera de la nacionalización los dirigentes pretendían superar el carácter coyuntural de las luchas por el valor del servicio, vinculando a Costa Rica con los proyectos de nacionalización de servicios públicos y de recursos productivos claves que se vive en el resto de América Latina. Las mujeres de la AMC manifestaron su apoyo a la política del gobierno revolucionario boliviano de nacionalización del estaño en momentos en que "el pueblo de Costa Rica lucha... por la nacionalización de las compañías eléctricas y por la construcción de plantas nacionales generadoras de energía..."[48] La incorporación de la ciudadanía a estas

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

luchas no era tarea fácil. Cada vez que se planteaba la posibilidad de llevar adelante una movilización ciudadana, pues la gente percibía que era víctima de abusos por parte de los monopolios que suministraban los servicios públicos, el liderazgo, proveniente de las Juntas, debía movilizarse para atraer a la población a las asambleas. Pero ese era solo el primer paso, la labor más difícil consistía en mantenerla en pie de lucha durante el tiempo que fuera necesario: semanas e incluso meses. Una vez iniciado un movimiento de protesta los líderes de base tenían una ardua tarea por delante, movilizándose para incidir en los medios de comunicación, visitando casa por casa, repartiendo afiches en paradas de buses y, en particular en los cincuentas, improvisando discursos sobre un banco en alguna esquina de los barrios pobres.[49]

La huelga general de pagos es un mecanismo de resistencia efectivo solamente cuando participa la mayoría de la población. De tal forma, en la protesta de 1952, para medir el nivel de compromiso de las vecindades a la huelga de pagos, el Comité Pro-Defensa de los Consumidores se abocó a recolectar firmas de quienes se comprometían a no pagar la luz[50] y, posteriormente, se decretaron varios "apagones" con el fin de medir la fuerza del movimiento. Para el 30 de setiembre de 1952 el Comité de Defensa de los Consumidores de Energía Eléctrica programó un "apagón general" durante diez minutos. El semanario *Adelante* avaló esta forma de protesta y sugirió explotarla ampliamente realizando apagones todos los días a partir de la fecha programada.[51] Sin embargo, no bastó el consenso para involucrar al conjunto de la ciudadanía josefina. *Adelante* reporta actos de intimidación de las masas "que obligaron por la fuerza a apagar las luces en establecimientos comerciales y casas particulares teniendo que intervenir hasta las radiopatrullas para proteger a los que se negaban a sumarse al apagón."[52] Tales actos de intimidación presentes, también, en manifestaciones posteriores, deben ubicarse en el contexto del "apagón" como estrategia para hacer frente a las autoridades y la empresa eléctrica donde la

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

fuerza de la protesta deviene exclusivamente de la participación masiva de la sociedad civil.

Es característico de los movimientos de tarifas la existencia de una "sensación de estafa" en la ciudadanía que contribuye a la creación de consenso en contra de quienes determinan los precios de los servicios. En 1958 aseguran las integrantes de la AMC que las amas de casa de los barrios populares protestan porque todos los meses hay aumentos en los recibos, aunque ellas afirman contundentemente lo siguiente: "estamos seguras de que gastamos la misma cantidad de fuerza."[53] La protesta popular se construye fundamentada en un sentimiento compartido de profunda desconfianza a la legitimidad de los cobros de los recibos por los servicios eléctricos y, como se verá más adelante, del agua. Este sentimiento compartido genera la ira que servirá de combustible a las amplias protestas y movilizaciones sociales.

Una nueva coyuntura de amplia participación social se ubica en 1957-58. Ante el anuncio de un aumento de las tarifas eléctricas, la Junta Progresista del Barrio Cristo Rey tomó la iniciativa de iniciar la protesta ciudadana y manifiestó su apoyo al ICE.[54] En 1958, en el contexto de la integración de las mujeres a la participación política, tres mujeres integraron la directiva del Comité Patriótico nombrado en la asamblea de la Escuela República Argentina: Betty Espinoza, Claudia Gardini y Alicia Astorga, dirigente de la AMC, quien al ser entrevistada por reporteros de *Adelante*, se manifiestó como una ama de casa que "ha sentido profundamente lo que significa el aumento de las tarifas eléctricas en su presupuesto familiar."[55] Como se analizó anteriormente, relacionando el problema de las tarifas eléctricas con el tema de la familia, la izquierda establece el vínculo entre la mujer y la política En esta forma, Astorga se proponía crear un discurso que movilizara a las amas de casa.

El ICE, para entonces, ya producía más energía eléctrica que las compañías privadas. Por esta razón, concluyeron los miembros

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

de la Junta, el Estado debía posibilitarle desarrollar sus propias redes de distribución en lugar de permitir que el "Trust" exportara millones de colones de utilidades al año que bien podrían utilizarse para impulsar el desarrollo del país. Semanas después varias Juntas Progresistas de Barrio México convocaron a una asamblea en la Escuela República de Argentina, en la que se nombró un Comité Patriótico de vecinos que unirían sus fuerzas con otros comités de los barrios de San José para hacer oír la queja de todas las familias de esta ciudad.

Estas luchas se caracterizan porque la identidad ciudadana se construye mediada por las identidades locales: las Juntas Progresistas de determinados barrios toman la iniciativa de impulsar un movimiento de protesta y, en aras de trascender la localidad, buscan alianzas con otras juntas que también se identifican por su pertenencia a barrios específicos. De tal forma, mediante el agregado de diferentes identidades locales se constituye una identidad ciudadana que adquiere efectivamente un carácter nacionalista. Sin embargo, ello no la convierte necesariamente en lucha nacional, pues su eje se encuentra en San José y la integración de las provincias, aun de las centrales, solo aparece marginalmente.[56]

No obstante, en las provincias también tienen lugar protestas contra los incrementos y la calidad del servicio eléctrico. Pero, en estas el protagonismo no está, como en las movilizaciones josefinas, en los ciudadanos de los barrios pobres, sino que más bien hay una conjunción bastante amplia de fuerzas sociales donde las clases medias y empresariales tienen un evidente protagonismo. En las provincias las diferencias sociales son menores que en San José lo que abre mayor espacio a las alianzas interclasistas. Pero, quizá más determinante en la conjunción de una pluralidad de fuerzas sociales, es el carácter regional que adquirieron estas luchas. En Puntarenas la huelga de pagos es acordada por los sindicatos, las Juntas Progresistas, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comerciantes Detallistas,

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

Cámara Junior y el Club Rotario. En este caso el problema no es exclusivamente el precio del servicio, sino también su calidad, pues el ICE solo suministra 60 voltios en lugar de los 100 estipulados.[57] Sin embargo, en la fuerza que a estos movimientos dan las reivindicaciones regionalistas, reside también su mayor limitación para integrarse a movilizaciones nacionales. Las jerarquías regionales que se afirman durante el proceso de expansión del Estado conducen a un trato diferenciado que, a su vez, genera demandas particulares que fortalecen las identidades locales. Estas se construyen en el espejo de esa "otredad regional" que cuenta con "privilegios" de los que la región subalterna carece.

Indudablemente, la movilización regional más importante fue la que tuvo lugar en Cartago en 1962-63. Resentía particularmente a los consumidores que el llamado "factor térmico", un porcentaje del monto de cada recibo que pagaban los abonados del ICE para el desarrollo de la electricidad en las zonas en Puntarenas y Guanacaste,[58] fuera mayor en Cartago que en el resto del Valle Central. Esa diferencia en el trato que el ICE daba a la provincia dio particular fuerza a la movilización. A la indignación por el desigual trato a los consumidores cartagineses, se agregaban dos ingredientes comunes que contribuían a la organización ciudadana para protestar mediante huelgas de pagos: la injusta tarifa establecida y la generalizada percepción de que las instituciones del Estado acudían a la "estafa" del usuario para engrosar sus ganancias. En el caso de Cartago se explotó particularmente el tema de que las altas tarifas servían para incrementar los privilegios de los funcionarios públicos.[59] En las movilizaciones josefinas analizadas anteriormente encontramos una generalizada sensación de malestar porque los usuarios se sienten estafados por las instituciones gubernamentales. Pero ello no condujo a manifestarse contra la existencia misma del ICE. Más bien las luchas josefinas fueron a favor de su fortalecimiento mediante la total estatización de la electricidad.

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
#QuedateEnCasa

En cambio, el movimiento cartaginés solo vio su final cuando, en 1964, se creó la Junta de Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) con el fin de sustituir al ICE en el suministro de la energía eléctrica.

Su líder, el periodista Emilio Piedra, se convirtió en el corazón del movimiento con las denuncias diarias a través de la estación cartaginesa *Radio Victoria* acerca de los abusos del ICE para con la provincia de Cartago, relegada en el desarrollo eléctrico del Valle Central, y víctima de incrementos de precios calificados como "desproporcionados". Piedra logró no solo levantar a la población, sino, especialmente, mantener vivo un movimiento regional durante dos años. La violenta represión llevada a cabo en la manifestación del 23 de noviembre de 1962, durante el gobierno de Francisco Orlich, que costó a la provincia tres muertos y decenas de heridos, contribuyó a cohesionar a la población en torno al movimiento. Los efectivos de la guardia civil de San José abrieron fuego contra la multitud congregada en el cuartel y sus alrededores. Si bien después de la noche del 23 no hubo actos que retaran a la fuerza pública, allí no acabó la represión: en los siguientes días 27 "ciudadanos cartagineses" fueron encarcelados y cruelmente golpeados en el cuartel.[60] Ante las voces que se alzaron para condenar la represión, Orlich acudió al argumento del "demonio comunista" para justificar la acción, pues en la protesta estaban inmiscuidos colaboradores de Moscú. No obstante, esta razón, lejos de justificar lo ocurrido frente a la opinión pública, dejó al gobierno en ridículo. En el contexto de la radicalización de la Revolución Cubana, la atmósfera anticomunista ganaba espacios políticos y por ello la represión a la izquierda podría ser bien aceptada por integrantes de las clases altas y medias de la sociedad. Pero en el caso de Cartago, a diferencia de las protestas josefinas analizadas páginas atrás, era a todas luces evidente que la izquierda no había tenido ninguna participación. Piedra se había presentado ante la opinión pública como anti-comunista y cuando las Juntas

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

Progresistas le ofrecieron su apoyo, él se negó a aceptarlo con el argumento de que estas eran comunistas. Mientras los movimientos josefinos fueron dirigidos por la izquierda y contaron especialmente con los trabajadores urbanos, en el caso de Cartago, el capital cartaginés tuvo una participación destacada, pues el escaso desarrollo eléctrico de la provincia afectaba la capacidad de expansión de las pocas empresas existentes.

La comunidad cartaginesa "de gente conocida" consideró a todas luces falsa la acusación de que los integrantes del movimiento fueran "comunistas."[61] Para entonces la hegemonía alcanzada por el discurso de los derechos ciudadanos y la incapacidad de Orlich de hacer valer su tesis del demonio comunista, generaron un amplio repudio social a la estrategia represiva. La sociedad costarricense mostraba que políticamente era un craso error acudir a la represión cuando la ciudadanía manifestaba su rebeldía frente a las políticas del Estado. En esta forma, el impacto político de la represión de la movilización de Cartago impuso límites en la política represiva en el contexto de la Guerra Fría.[62] Pero, si los líderes de este movimiento mantenían posiciones políticas conservadoras, mientras que quienes dirigían las movilizaciones josefinas estaban vinculados con la izquierda, ¿por qué el gobierno de Orlich dirigió su aparato represivo en contra de Cartago?

Si bien ya en 1962 las protestas contra las tarifas eléctricas formaban parte de la tradición de lucha social del Valle Central, no se había dado anteriormente una resistencia tan tenaz como la ocurrida en Cartago. La organización ciudadana neutralizó durante meses el principal instrumento de represión que podía utilizar el ICE: los cortes de electricidad. Ello condujo el enfrentamiento a una situación de suma-cero, que el gobierno se propuso quebrar mediante la represión del 23 de noviembre. En mayo de 1962, el ICE decidió cortar el servicio a los huelguistas morosos, lo que generó tácticas inéditas de lucha. La ciudadanía rebelde respondió a los cortes de electricidad enfrentando

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

a los vehículos del ICE a cargo de esta tarea y, según el presidente Orlich, la violencia llegó a Tierra Blanca, pueblo localizado en las laderas del Volcán Irazú, donde los empleados del ICE fueron agredidos a pedradas.[63] Ante los cortes masivos en el comercio y en las casas de habitación, la respuesta de los huelguistas no fue pagar los recibos, sino movilizarse para reconectar por sus propios medios los servicios[64]: precisamente dos aserraderos (industrias de un alto consumo eléctrico) propiedad de los hermanos Trejos y de José González respectivamente, obsequiaron la madera para construir escaleras, las ferreterías regalaron clavos y carpinteros y electricistas se pusieron al frente de cuadrillas ciudadanas de reconexión. Los métodos violentos se utilizaron en el centro de Cartago: Piedra narra que en la esquina de la Parada (que refiere a la central de buses de la ciudad) los huelguistas volcaron un vehículo y pincharon las llantas de otros a cargo de la desconexión y "detrás de los camiones del ICE que desconectaban iban los huelguistas reconectando" por lo que "ninguna persona carecía de fluido eléctrico." Pero, según Orlich, la táctica de la reconexión no se circuscribió exclusivamente a la ciudad de Cartago, se extendió a Tierra Blanca y Turrialba.[65]

En síntesis, la organización de las reconexiones, la decisión de los huelguistas de enfrentar a funcionarios del ICE por la fuerza si fuera necesario, la expansión de estas tácticas de lucha a áreas rurales de la provincia y los violentos atentados contra la infraestructua eléctrica, fueron factores que, en las altas esferas del gobierno, causaron el temor de enfrentar un movimiento que podría convertirse en incontrolable. La represión fue el mecanismo ensayado para romper la capacidad de respuesta ciudadana. Sin embargo, el efecto del terror resultó inverso: a fin de cuentas, el movimiento ciudadano se fortaleció frente a un gobierno que a los cuatro vientos se había presentado como agresor de una ciudadanía desarmada. El triunfo de los cartagineses tuvo su máxima expresión con la creación de la

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

JASEC, pero contradictoriamente el balance a partir de entonces empezó a inclinarse a favor del gobierno. El movimiento cívico se desestructuró y, en los años venideros, los fundamentos mismos del discurso regionalista cartaginés fueron debilitándose frente al empoderamiento del Estado.

LAS PROTESTAS POR EL AGUA EN EL PROCESO DE CENTRALIZACIÓN DEL ESTADO

Como se señaló en las páginas iniciales, la carencia del agua constituyó un problema crónico en las décadas de los cincuentas y sesentas. Barrios populares por días enteros no recibían una gota de agua, pero los recibos, cuyos montos aumentaban periódicamente, llegaban cada mes y, al consumidor que no pagaba, se le negaba por completo el suministro de agua. Por ello la ciudadanía percibió que, a través del servicio del agua, las instituciones públicas imponían una relación abusiva y, debido a que los barrios de clase media y alta contaban con un servicio de mayor calidad, los habitantes de los barrios pobres percibían que su condición de clase incidía en el trato que, en torno a este servicio básico, recibían del Estado.

Mientras el servicio se mantuvo en manos de la Municipalidad en general, surgieron movilizaciones locales donde cada población libró su lucha particular frente a sus representantes municipales. En 1957 los vecinos de Cinco Esquinas de Tibás, desesperados por la falta de agua, para llamar la atención de la municipalidad, un domingo decidieron "romper con palas y picos la calle para encontrar el agua que necesitaban."[66] Se infiere de la noticia que los munícipes tenían en sus manos la solución a la carencia de agua, pues alarmados al día siguiente ordenaron resolver el problema.

No obstante, en 1962 esta situación cambia drásticamente cuando las municipalidades quedan obligadas a traspasar las

Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

propiedades e instalaciones del servicio de aguas y cañería al SNAA,[67] que centralizaría el servicio con el fin de modernizar el sistema de acueductos y alcantarillados en todo el país. La Municipalidad de Goicoechea reacciona ante esta medida, exigiendo una indemnización de 15 millones al Estado[68] y sumándose a las voces de protesta de la sociedad civil que durante el resto de la década de 1960 se escucharán en contra de esta medida. Al asumir la administración de los acueductos de los nueve cantones del área metropolitana, el SNAA establece una única tarifa incrementando los precios hasta en un 100 por ciento en la zona residencial, 300 por ciento en la comercial y 500 por ciento en la industrial.[69] Sin embargo, hay reportes de aumentos que superan con creces estas cifras. La lluvia de cenizas del Volcán Irazú que cubre San José obliga a la población a incrementar el consumo de agua. Pero los molestos usuarios atribuyen por completo los exorbitantes aumentos a las políticas abusivas de la nueva institución.[70]

Cuando el SNAA anunció la instalación de medidores en todo el país, la ciudadanía mostró una profunda desconfianza hacia esta medida, porque consideró negativa su experiencia con los medidores eléctricos y, también, con los medidores de agua que ya habían sido instalados. La percepción generalizada era que la Compañía de Fuerza y Luz manipulaba en su beneficio el monto asignado. El gerente del SNAA, ingeniero Jorge Carballo, intentó convencer a los consumidores de los beneficios de los medidores para las familias pobres y de las potencialidades de la institución para resolver el problema del abandono en que se encontraban las cañerías en el área metropolitana, pues las municipalidades carentes de recursos no tenían capacidad para ello.[71] También el SNAA se comprometió a resolver los problemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las ciudades provinciales. Si bien estas promesas en la actualidad resultan convincentes debido al significativo mejoramiento que en las décadas siguientes tuvo el sistema de agua potable, durante los años

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

sesentas fueron ampliamente rechazadas. Por ejemplo, la Directiva de la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas se manifestó contra el ajuste porque hay "gran cantidad de barriadas en San José que viven sin agua..."[72]

En estas luchas que atacaban directamente el proceso centralizador del Estado, los ciudadanos rebeldes contaron, al menos coyunturalmente, con el apoyo de sectores opuestos al PLN. Estos encontraron que las reivindicaciones de los grupos subalternos tenían coincidencias con una de sus preocupaciones básicas: detener el proyecto liberacionista de expansión del Estado. El diario *La Nación* se sumó decididamente a las protestas, enfrentándose a la institución y ofreciendo un amplio espacio a sus opositores.[73] La ciudadanía no estaba habituada a aumentos en el costo del agua. De repente, una institución impuesta por el gobierno se posesionaba de los bienes municipales y establecía arbitrariamente, según la percepción generalizada, exorbitantes precios al vital servicio.

En los años sesentas el SNAA se convirtió en el foco de las luchas relacionadas con el agua. Diputados de oposición como Deseado Barboza Ruiz atacaron frontalmente la institución solicitando que el servicio regresara a manos de las municipalides, pues afirma Barboza apoyándose en datos sobre la construcción de cañerías, los gobiernos locales habían sido más eficientes que la nueva institución centralizada. Además, las cañerías rurales se habían estancado. Según *La Nación* "el público está prácticamente indefenso, legalmente, ante los aumentos en el costo del servicio de cañerías. No hay más que pagar y callar."[74] Mientras que en el pasado se negociaba con representantes de las comunidades, el SNAA representa el paso a una modernidad en la que los rostros humanos desaparecen para ser reemplazados en las oficinas públicas por burócratas cuya posición en el mundo no depende de la aprobación o desaprobación de la colectividad social. Además estos ni siquiera asumen responsabilidad alguna por las medidas tomadas por un grupo de jerarcas, casi tan distantes de ellos como del público.

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

En 1963 el cantón de Guadalupe asumió la vanguardia de la protesta. Enrique Tristán fue nombrado presidente del Comité de Huelga de Guadalupe, el cual surgió del seno de la Junta Progresista Ricardo Moreno Cañas. Tristán, convencido de que el SNAA no se atrevería a cortarles el agua, afirmó que los vecinos irían a la huelga de pagos. El líder se quejó de la indiferencia total con que la burocracia del SNAA trataba a los usuarios y expresó la sensación de estafa compartida por los ciudadanos, señalando que a estos no se les permitía enterarse de las lecturas de los medidores.[75] *La Nación* recogió la inquietud popular de que con los medidores se impondría un impuesto adicional a las familias grandes que, con frecuencia, eran familias pobres.[76]

Pero el SNAA no estaba dispuesto a echar marcha atrás con este método de distribución del cobro del agua, más bien, aseguraba su gerente, en el corto plazo el medidor sería universalizado.[77] El diputado Milton Gutiérrez asumió las demandas del Comité de Huelga y llegó a afirmar que hasta entonces el SNAA no había realizado ninguna mejora a la cañería nueva en perfecto estado "que se le *arrebató* a la Municipalidad."[78] En esta forma rescataba el sentimiento de despojo de la comunidad por parte del gobierno central compartido por los vecinos, pues este se posesionaba de un bien que ellos consideraban les pertenecía basándose en un sólido argumento: las cañerías se construyeron gracias a sus contribuciones. El Comité de Huelga de Guadalupe decretó la Huelga de Pagos y convocó a otros cantones a sumarse.

Gutiérrez expresaba su asombro por el nivel de conciencia cívica que con esta movilización surgía en un cantón, según sus palabras, tan apolítico y apático como el de Guadalupe. También el alto nivel de cohesión social había caracterizado las movilizaciones analizadas páginas atrás en los barrios pobres contra las altas tarifas y en pro de la nacionalización de la electricidad. En efecto, los momentos culminantes en el proceso de constitución de la identidad ciudadana se encontraban en estas luchas

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

defensivas, cohesionadas por el sentimiento compartido de abuso por parte de instituciones estatales o de empresas monopólicas como las que controlaban la distribución de la energía y, como se verá más tarde, el servicio de buses. Sin embargo, el combativo movimiento de Guadalupe vio su final cuando el SNAA aceptó realizar una reducción significativa de las tarifas.

En abril de 1964 el periódico femenino resaltaba la valentía de doña Rita Zeledón de Aguilar, quien con estoicismo había iniciado una huelga de pagos en el Paso de la Vaca y afirmaba que se mantendría vigilante para impedir que le cortaran el agua. Su protesta se debía a que el monto de sus recibos había aumentado en un 400 por ciento en el último año.[79] En 1964 un foco de resistencia se concentró en López Ballar (Guadalupe). Sus habitantes, decididos a no pagar los recibos, se mantuvieron, frente a los amenazantes guardias enviados por el gobierno, cuidando los medidores para evitar que les cortaran el agua. Las aliancistas, entonces, aseguraron que esperaban que este fuera "el principio del fin" de ese "nefasto instituto." En su periódico se menciona, entre otras mujeres, a doña Zula Bejarano de 64 años, quien se había mantenido durante tres días vigilando el medidor.[80]

El año de 1964 presencia múltiples protestas por el traspaso del servicio de agua al SNAA. En Heredia hay una fuerte oposición fundamentada en que "los vecinos de Heredia conocen las causas de la elevación de las tarifas que efectúa el SNAA en cuanto se hace cargo de las cañerías..."[81] La municipalidad de San José se declara en contra del "odiado instituto"[82] y la municipalidad de Barva, con el apoyo de sus vecinos, se niega al traspaso de la cañería al SNAA.[83] El descontento con el servicio llega a Pérez Zeledón, pues sus habitantes se quejan de que este era mejor y más barato cuando estaba en manos de la municipalidad.[84] En 1964, Santiago de Paraíso, Atenas y, especialmente, Siquirres presentan una oposición decidida al SNAA. En Siquirres se organiza una huelga de pago y en el distrito del

Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

Cairo, cuando el SNAA intenta cortar el servicio a los huelguistas, "los vecinos se movilizan para impedirlo."[85] En 1967 la Junta Progresista de Pavas se manifiesta contra el aumento de tarifas del SNAA, pues afirma su representante, Ismael Mora, las tarifas ya habían sido elevadas cuando se traspasó el servicio a esta institución y, en su criterio, "no se ha apreciado ninguna mejora en la cañería."[86] El gobierno fue apagando de uno en uno estos incendios hasta que el SNAA se convirtió en una institución suficientemente eficiente como para justificar ante la sociedad civil su monopolio sobre tan esencial recurso.

El traspaso de la cañería municipal al SNAA fue percibido por la población de las diversas regiones del país como una agresión a las pertenencias comunales que conducía a elevados incrementos de precios, que conforme se afianzara el monopolio, resultaría más difícil detener mediante la protesta social. Al igual que las luchas relacionadas con la electricidad, también se impuso la sensación generalizada de que la institución abusaba adrede de los consumidores, manipulando el monto de los recibos. Esa sensación de estafa contribuyó a cohesionar a la ciudadanía y a atizar el fuego contra la institución.

Pero las múltiples protestas de los sesentas en contra del SNAA apenas pusieron un límite a los aumentos de tarifas. A diferencia de las luchas eléctricas de los cincuentas, en el caso del servicio del agua las municipalidades se sumaron a la rebeldía ciudadana. Sin embargo, dos factores incidieron negativamente en la capacidad de lucha contra el "odiado instituto". El primero, el anticomunismo, que al igual que en las luchas eléctricas, constituyó una efectiva herramienta para debilitar movilizaciones dirigidas por líderes comprometidos con la izquierda. Sin embargo, este no impidió que las Juntas Progresistas lograran alianzas con las fuerzas políticas de oposición y que, por lo menos antes de convocar a la movilización, ganaran la simpatía de *La Nación*. El segundo factor, quizá de mayor peso que el primero, fue el predominio de múltiples resistencias comunales

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Ejemplar sin valor comercial

que permanecieron en el nivel de la localidad. Pese a la protesta generalizada ello impidió el surgimiento de un amplio movimiento ciudadano que enfrentara al Estado.

LOS CIUDADANOS SE ENFRENTAN A LOS EMPRESARIOS DE AUTOBUSES

En las décadas de los cincuentas y los sesentas el autobús se convierte en parte de la vida cotidiana de los sectores subalternos y las clases medias urbanas. Cada vez resulta más difícil movilizarse a pie por San José y cada vez un mayor número de personas se movilizan desde distintas regiones del área metropolitana especialmente hacia la capital. Según Guillermo Carvajal y Jorge Vargas, los flujos masivos diarios de población que se desplaza a la Aglomeración Urbana Central, "de un estimado de 158,900 movilizaciones diarias en 1958, [asciende] a 532,000 en 1972."[87] Una deficiente flota de autobuses hace frente a este impresionante incremento de la población movilizada. Con frecuencia los buses incumplen sus horarios, las unidades en mal estado podían quedar varadas, no hacen las paradas reglamentarias y los choferes arrancan sin percatarse si los pasajeros han terminado de subirse o bajarse de la unidad.[88] La calidad y el precio del transporte público, indispensable para movilizarse al trabajo, se convierte en elemento central de las condiciones de vida no solo porque su precio afecta el bolsillo de los usuarios, sino porque ese rato que se consume en el autobús, cuando el servicio es deficiente, puede convertirse en una pesadilla cotidiana, pues alarga innecesariamente la espera y la duración del viaje, y obliga al usuario a trasladarse en condiciones de hacinamiento.

En 1963 la Junta Progresista de Hatillo presenta una queja ante la institución gubernamental reguladora del servicio público, por cuanto la empresa de autobuses de la localidad solo

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

presta servicio a una parte de la ciudadela y, además, no ofrece unidades en circulación entre las 12 m. d. y las 2 p. m. "ocasionando perjuicio a sus usuarios que llegan tarde a sus trabajos."[89] Las ciudadelas del INVU, construidas fuera del perímetro de la ciudad, por lo que, inevitablemente, sus habitantes dependen del autobús para movilizarse hacia cualquier sector del área metropolitana. El documento citado evidencia que, para entonces, persiste aun la costumbre de almorzar en casa, lo que requiere de un servicio de autobuses lo suficientemente eficiente como para que sus usuarios puedan, en el lapso de dos horas, viajar a su casa, almorzar y regresar al trabajo.

Mientras, las empresas de transporte público que tienden a constituirse en monopolios, se empeñan en obtener aumentos de tarifas, el servicio continúa dejando mucho que desear. Las luchas se desarrollan en dos niveles. Las comunidades, mediante las Juntas Progresistas, libran una lucha cotidiana por mejorar el servicio. Por otra parte, el tema del servicio y el precio de los autobuses convoca a la ciudadanía a participar en manifestaciones colectivas que trascienden el espacio comunal. En 1952 *Adelante*, refiriéndose a un aumento de buses aprobado por la Asamblea Legislativa, sostiene que "se hace necesario pasar de la simple protesta a la acción enérgica."[90] Las luchas en contra de las tarifas eléctricas en el caso de San José se construyen como nacionalistas y, las del agua, como opuestas a la expansión del Estado a costa del gobierno municipal. Aquellas que surgen en torno al precio y servicio de autobuses se presentan como luchas que enfrentan al capital monopólico nacional, que posesionado de las líneas de buses, impone malas condiciones de servicio a usuarios indefensos.

En 1958 vecinos de la ciudadela de Hatillo presentan al Consejo Superior de Tránsito una protesta contra la Dirección de Tránsito. Esta abrió una licitación de "camiones de pasajeros" entre Hatillo y el centro en la que participaron varios empresarios. Según los vecinos, la línea de Alajuelita presentó las mejores

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Editorial UCR
Ejemplar sin valor comercial

condiciones, sin embargo, sin ninguna razón de peso, la licitación la obtiene el Sr. Arnoldo Acosta.[91] Efectivamente, Acosta es conocido como un empresario que, mediante la monopolización de las líneas de buses en San José, "se ha hecho rico de la noche a la mañana."[92] En 1957, *Adelante* sostiene que mientras los pequeños y medianos empresarios están dispuestos a seguir operando sus líneas a 15 céntimos, "la mayoría de las arterias están para uso del monopolio de don Arnoldo Acosta"[93] quien pretende subir en cinco centavos el pasaje y es el causante de "la ruina de las pequeñas empresas de transporte interurbano."[94] Como solución al problema del alza de los buses y a la monopolización del transporte, *Adelante* propone que el gobierno compre las líneas de Acosta para venderlas a pequeños empresarios.[95] Pero, según Mora, los empresarios congregados en una poderosa institución con tentáculos políticos, la "Cámara de Transportes", logran mantener sus privilegios.[96]

En 1959, a raíz de la "Ley de Aguinaldos", los transportistas deciden cobrar cinco céntimos más en diciembre para cargar directamente en los usuarios su pago a los empleados. Esto genera una amplia movilización dirigida por las Juntas Progresistas. En esta encontramos estrategias similares a las ensayadas en las luchas contra el aumento de tarifas eléctricas: se realizan asambleas en los barrios, se prepara a sus habitantes para una manifestación de protesta en San José, se reparten volantes, se colocan en las paradas de buses cartelones que dicen "no pague el cinco más" y se solicita a la población enviar telegramas al Presidente pidiéndole que desautorice el aumento.[97] En 1962, cuando *Libertad* denuncia a los autobuseros por intentar de nuevo un aumento ilegal de los pasajes, muestra su confianza en la participación cívica, solicitando al público "denunciar sistemáticamente a los transgresores."[98] En estos años en que la Guerra Fría se intensifica, en Costa Rica no se viven detenciones masivas o ataques directos a la integridad física de los denominados comunistas, pero se experimentan

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

otras formas de violencia como una política de "silenciamiento" en los medios de comunicación hegemónicos que invalida cualquier propuesta u opinión proveniente de la izquierda. Los autobuseros aprovechan este "talón de Aquiles" del liderazgo para desacreditar las luchas. Así en la movilización cívica del 59, utilizan los medios de comunicación para acusar a las Juntas Progresistas como comunistas y extremistas.[99]

Las movilizaciones de los cincuentas en torno al transporte no condujeron a un mejoramiento sustantivo del servicio. Por ello, las Juntas Progresistas que en 1957 abogaban porque esta actividad estuviera controlada por el Estado, pero consideraban que debía permanecer en manos privadas, en los sesentas propusieron que este servicio fuera "municipalizado." Es significativo que se apelaba a los municipios y no al gobierno central para que asumiera esta actividad. Ello expresa la profunda desconfianza que despertó el proceso de centralización de servicios públicos en manos del Estado. La expansión del SNAA fue vista como una imposición por parte de la ciudadanía que prefería depositar su confianza en el municipio que en una institución centralizada. El sentido común indicaba al usuario que si el transporte público quedaba a cargo de la municipalidad, cada localidad podría tener más posibilidades de negociación de acuerdo con las necesidades propias: horarios, regulaciones de sobrecargo, paradas, etc.[100] En 1965 *Nuestra Voz* llamaba a apoyar la lucha de la Federación de Juntas Progresistas "contra los autobuseros que pretenden hacer más ganancias echando nuevas cargas sobre las espaldas del pueblo costarricense" y abogan por "la municipalización del transporte público".[101] En una carta pública típica de las Juntas Progresistas de la época, en 1966, manifiestan al presidente electo José Joaquín Trejos Fernández su oposición al aumento de las tarifas.[102]

En 1974 la prensa denuncia que hay un faltante de 200 autobuses en Costa Rica. De nuevo *Nuestra Voz* propone la municipalización del transporte para acabar "con el desastre del transporte

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR Ejemplar sin valor comercial

de personas" y denuncia la forma brutal con que la fuerza pública golpea a un grupo de usuarios cartagineses que se declaran en huelga en contra de la empresa de transporte público de Cartago.[103] El periódico femenino expresa en los siguientes términos las quejas de la ciudadanía: "faltan buses, las líneas no tienen horarios puntuales, el sobrecargo es insoportable, quieren subir cada año las tarifas..." En *La Nación* se ofrece una idea del sobrecargo, señalando que "buses de 40 pasajeros llevan 80 y más pasajeros."[104] *Nuestra Voz* fundamenta su confianza en las municipalidades al afirmar que "la recolección de basura demuestra que nuestras municipalidades, bajo la vigilancia del pueblo, pueden prestar mejores servicios públicos que la empresa privada."[105]

En síntesis, las tarifas y calidad del servicio de buses desvelan a los ciudadanos. El número de unidades disponibles, en un período de rápida expansión de los desplazamientos, dista mucho de ajustarse a la demanda. El mal servicio, desde la perspectiva de los usuarios, no se corresponde con el peso que este tiene en su bolsillo. Perciben que la lógica de los empresarios, respaldados por el gobierno, es sacar el máximo provecho con la menor inversión. Ello les mueve a realizar protestas comunales y, cuando las decisiones en torno a los precios afectan al conjunto de los usuarios, las protestas organizadas por las Juntas Progresistas se generalizan en el espacio urbano. De nuevo se impone su lógica de trabajo: el activismo que simultáneamente se realiza en las diversas comunidades es la base de movilizaciones de protesta de alcance regional.

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

1983: UNA LUCHA DE ALCANCE NACIONAL

Hasta ahora se han analizado las luchas en torno a los servicios públicos que tuvieron lugar, especialmente, en las décadas de 1950-60. Entonces, transformaciones sustanciales en la política

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

estatal motivaron a los ciudadanos a demostrar que, ante el creciente poder estatal, ellos podían responder con la protesta cívica en aras no solo de resistir, sino también de incidir en las decisiones políticas que afectaban servicios indispensables para su sobrevivencia. En estas páginas se analizará una lucha ciudadana de alcance nacional en el contexto del repliegue del estado de bienestar bajo la bandera del neoliberalismo. La movilización expresa la decisión ciudadana de medir sus fuerzas con un gobierno que justifica, con discursos macroeconómicos, las decisiones que afectan sustancialmente su nivel de vida. En el contexto de una violenta crisis económica el gobierno de Luis Alberto Monge aprobó un fuerte incremento de las tarifas eléctricas. Pocos meses después la protesta ciudadana se había extendido a todo el país. El liderazgo comunal y sindical de izquierda hegemonizó una movilización que puso en jaque la legitimidad del gobierno por lo que este, repentinamente, enfrentado al bloqueo de la mayor parte de las vías de comunicación del país, no tuvo más remedio que ceder.

En los dos gobiernos liberacionistas del período 1970-1978 hubo una rápida expansión de las clases medias y un sustancial mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos subalternos. El creciente poder adquisitivo del salario fue acompañado de una serie de subsidios creados por el Estado, tales como la universalización de la seguridad social, las asignaciones familiares y la masiva construcción de casas de habitación de bienestar social.[106] Sin embargo, el gobierno se valió para su expansión del endeudamiento externo. En 1980 este proceso de expansión se revirtió en una severa contracción provocada por la combinación del deterioro de los términos de intercambio, acompañado del inusitado incremento de los intereses de la deuda externa. Repentinamente, se reduciría el alto nivel de consumo de las clases medias, mientras los sectores más pobres eran empujados hacia condiciones de miseria.[107]

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

Si el presidente Rodrigo Carazo se negó a pactar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Luis Alberto Monge llegó al poder decidido a "poner la casa en orden", reiniciando las negociaciones con dicha institución. El nuevo mandatario, siguiendo los lineamientos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso, volcó el peso de la crisis hacia las capas pobres y los sectores medios. La ayuda que los organismos internacionales como la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y el Banco Mundial ofrecieron al país, se entregó supeditada a la transformación del estado de bienestar en un estado liberal que reduciría sus funciones, promoviendo a la vez una vigorosa expansión de la empresa privada. De tal forma, los representantes del Estado se vieron obligados a recortar los gastos del sector público, entre los que se encontraban aquellos dirigidos a combatir la pobreza. Pero el mismo gobierno de Monge ideó mecanismos para paliar los efectos de la política económica en los sectores subalternos. En 1983 creó el Plan de Compensación Social que incluía una política de escalonados incrementos salariales, programas de distribución de alimentos, de construcción de viviendas de interés social y de distribución de tierras a campesinos.[108] Sin embargo, los efectos paliativos de esas medidas solo empezaron a sentirse en años posteriores. En 1983 la sociedad civil estaba conmocionada por el violento deterioro del valor adquisitivo del salario provocado por una crisis cuyo fondo aún no se vislumbraba. Conforme avanzaban las medidas neoliberales que buscaban no solo superar la crisis, sino también transformar la dinámica de la reproducción de capital, la ciudadanía percibió que no se hallaba simplemente frente a una adversa coyuntura, sino también ante la construcción de un nuevo proyecto socio-económico en el que los sectores subalternos y las clases medias serían los perdedores.[109]

Los constantes aumentos de precios en la canasta básica, hacían reducir día a día el poder adquisitivo de los salarios.[110] La devaluación entre 1980 y 1983 ascendió a cerca de un 500 por ciento

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

lo que puso en serios aprietos al ICE para cumplir con las deudas adquiridas en el exterior, en un contexto de dramático incremento de los intereses de los préstamos externos y, para compensar su situación económica, propuso leoninos incrementos.[111] Entonces se activaron los tradicionales mecanismos de movilización ciudadana ante los aumentos en los servicios públicos. De acuerdo con la lectura sobre la situación política de un editorialista de *Libertad*: "un brutal aumento de las tarifas eléctricas despertó de un solo tirón a todo el mundo"[112] y, debe agregarse, puso en acción la experiencia de lucha de la ciudadanía para enfrentar las medidas tomadas por el gobierno.

Este movimiento se desarrolla en una coyuntura caracterizada por la explosión de protestas sociales que, en buena medida, giran alrededor del precio de los servicios públicos. El 30 de junio el dirigente de ANDE, Walter Acosta, oponiéndose a un incremento de las tarifas de transporte, explica la preocupación de la gente de escasos recursos por los incrementos en servicios públicos en los siguientes términos: "un 40 por ciento del salario el trabajador lo destina para el pago de alquileres, un 20 por ciento para el pago de tarifas eléctricas y de agua y un 15 por ciento para el pago de transporte".[113] Es en este contexto cuando el Estado debe enfrentar, entre otros focos de agitación social, a las organizaciones de lucha por vivienda dispuestas a hacer escuchar sus demandas, empleando consistentemente métodos de presión como tomas de edificios y bloqueos de vías que conducirían a violentos enfrentamientos entre sus participantes y el Estado.[114]

Pero el punto culminante de la movilización ciudadana fue la protesta en contra de los incrementos de las tarifas eléctricas. Ante un aumento de más del 80 por ciento en las tarifas eléctricas, en Hatillo 5 se reunieron más de mil personas que se propusieron congregar en los siguientes días a todas las comunidades de Hatillo.[115] Al igual que en los movimientos de los años cincuentas la génesis de la movilización se encontró en un barrio

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

populoso de San José. Hatillo tomó la iniciativa de realizar las dos primeras marchas que concluyeron frente a las oficinas del Servicio Nacional de Electricidad (SNE), institución a cargo de regular las tarifas eléctricas, que había aprobado sin problemas los últimos incrementos propuestos por el ICE.

Sin embargo, el malestar contra las altas tarifas eléctricas se generalizaba en San José a tal punto que el 1° de mayo, día que precedió a la segunda marcha de Hatillo, en el desfile del Día de los Trabajadores los discursos giraron en torno al alto costo de la vida y, en particular, al aumento de las tarifas eléctricas. Para inicios de mayo *Libertad* reportaba manifestaciones en Turrialba, Guadalupe, Desamparados, Tibás, Alajuela "y otros lugares."[116] Pocos días después Puriscal volvía a tener un papel protagónico el 8 de junio, cuando el ICE empezó a cortar el servicio eléctrico a los participantes de la huelga de pagos.[117] Entonces los bloqueos de vías se extendieron en pocas horas por todo el país y, ante la inmensa protesta, el gobierno cedió y aceptó la propuesta del liderazgo representado por el Comité Nacional Coordinador, elegido por las distintas poblaciones que se integraron a la lucha. El gobierno, aun cuando enfatizó la presencia de "comunistas" en el movimiento,[118] comprendió que esa sensación generalizada de que una de sus instituciones se imponía con prepotencia ante una sociedad severamente golpeada por la crisis ponía su legitimidad en una delicada situación y, por ello, la peor respuesta sería la represión. También se propuso enmendar la imprudente acción del ICE de realizar cortes masivos del servicio eléctrico a la ciudadanía en huelga de pagos.[119] Por otra parte, el movimiento había logrado un amplio margen de apoyo no solo entre diputados y munícipes de izquierda, sino también entre integrantes de partidos mayoritarios.[120] En el seno mismo del Estado, el gobierno perdía legitimidad en un momento en que el país "lleno de barricadas" enfrentaba una situación de caos total.[121]

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

En el proceso de transición de las Juntas Progresistas a las Asociaciones de Desarrollo, los líderes de izquierda vislumbraron el potencial económico y político de las Asociaciones y se abocaron a competir por su control con los partidos tradicionales. En Hatillo, líderes comunales integrantes del PVP habían alcanzado un papel hegemónico en la Asociación de Desarrollo Integral. Según los líderes de base de Hatillo Carlos Molina, Sonia Briceño y María Isabel Sánchez, el PVP, luchando contra el inmenso poder de los líderes locales liberacionistas que contaban con el apoyo del gobierno, visitando "casa por casa" lograron tomar tres puestos de la Asociación de Desarrollo, incluso el de presidente, que ocupó Hubert Méndez, líder de la movilización.[122]

Evidentemente las elevadas tarifas afectaban no solo la economía familiar, sino también las industrias locales y, por consiguiente, las fuentes de trabajo. Por ello, gentes "de negocios" compartían con humildes trabajadores un sentimiento de expoliación de sus recursos por parte del Estado. Por ejemplo, Palmar Norte fue a la huelga de no pago gracias a una heterogénea coalición: la Cámara de Comercio, la Asociación de Desarrollo Comunal y el Frente de Lucha.[123] Sin embargo, en el caso de la región central, la iniciativa provino de los sectores medios y, en especial, pobres.[124] Pero no casualmente el líder de Hatillo era, a la vez, presidente de la Asociación de Desarrollo de Hatillo y dirigente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), así como del PVP. En este movimiento la participación sindical jugó un papel central. El trabajo de base en las comunidades se combinó con las protestas sindicales.

En esta movilización encontramos un liderazgo de intelectuales pertenecientes a la clase media que trabaja al lado de las comunidades para transformar el descontento ciudadano en protesta social. Pero a diferencia de las movilizaciones en los barrios del sur analizadas páginas atrás, la huelga se expandió rápidamente por todo el país e integró a amplios sectores ciudadanos. El líder local de izquierda Sigifredo Méndez, refiriéndose

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Edición de Ejemplar sin valor comercial

al carácter masivo de esta movilización, sostenía que "era un problema que afectaba a todos."[125] El apoyo que la clase media y, en particular, el gremio de pequeños y medianos comerciantes brindó al movimiento en el Valle Central, lo fortalecía y legitimidaba y, a la vez, debilitaba el argumento de que se trataba simplemente de una treta de la izquierda para desestabilizar la democracia. Esta lucha constituyó la primera de las movilizaciones ciudadanas del período estudiado que tuvo un carácter nacional y, por ello, cuando los participantes la definen, se apropian del concepto que representa a los integrantes del Estado nación: los costarricenses. *Aportes* se refería a los rótulos que "en las ventanas de miles de *costarricenses*" anunciaban la decisión colectiva de no pagar el recibo de la luz.[126] El carácter "ecuménico" de la movilización era expresado por un anónimo dirigente de Hatillo 5 cuando señalaba que esta ha dejado, entre otras enseñanzas, que "debemos luchar unidos, sin ningún distingo político ni religioso."[127] Este movimiento, al igual que la movilización del año 2000 analizada adelante, tuvo poder de convocatoria en todo el territorio nacional, atrayendo a distintos estratos sociales lo que permitió a su liderazgo presentarse ante la opinión pública como representante de "los costarricenses".

El liderazgo de Hatillo en esta lucha se alcanzó particularmente mediante la combatividad de su Asociación Integral de Desarrollo.[128] Los espacios de participación política local como organizaciones de desarrollo, juntas progresistas e incluso municipios, fueron ampliamente aprovechados para organizar el movimiento. En las comunidades se llevaban a cabo periódicas reuniones donde los participantes, entre los que frecuentemente se encontraban amas de casa, se referían al drama cotidiano para hacer que sus ingresos alcanzaran para la sobrevivencia. De tal forma, el éxito de las manifestaciones se debía a "cientos de reuniones en casi todo el país, incluso repetidas veces en un mismo lugar, en poco más de una semana."[129] Del liderazgo dependía,

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
#QuedateEnCasa

en buena medida, la participación de los vecinos. Este debía preocuparse por encontrar un lugar de reunión (que podía ser un salón, una escuela o incluso una casa de habitación), elaborar propaganda mediante volantes, carteles o mantas, efectuar visitas a emisoras de radio para convocar al mitin e incluso ir casa por casa, convenciendo a los vecinos de la importancia de su asistencia al evento.[130] El líder de base de los ochentas actuó como organizador incansable que, como lo señala Sigifredo Méndez, estaba dispuesto a asistir en las madrugadas a las estaciones de buses a repartir volantes, a reunir gente en su casa para elaborar pancartas y a visitar, pacientemente, las casas del vecindario. Este trabajo de base, que simultáneamente se dio en múltiples localidades del país, constituyó el cimiento sobre el que se creó la amplia movilización nacional y la experiencia para ello devenía de las organizaciones comunitarias, dirigidas, en su mayoría, por integrantes de la izquierda.

Pero el proceso de creación de una atmósfera de protesta rebasó los espacios de participación política de la gente común. Como indica un anónimo analista, "los comentarios en los buses, pulperías, esquinas de barrios, de vecina a vecina..."[131] constituyeron formas típicas de politización que también estuvieron presentes en los movimientos cívicos que le precedieron. Para habitantes citadinos de los sectores subalternos y medios, la movilización ciudadana es la culminación de un proceso de manifestación generalizada de malestar en torno a las medidas tomadas por el Estado que afectan al universo social con el que se convive.

El momento culminante de esta "nacionalización" de la protesta social es el día 8 y la mañana del 9 de junio, cuando prácticamente todo el país amanece paralizado por los bloqueos. Motivó la participación masiva el temor de que, una vez dejado pasar el momento justo para tomarse el pulso con el gobierno, este continuara imponiendo aumentos desproporcionados a una ciudadanía que habría perdido su capacidad de defensa.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Ejemplar sin valor comercial

Por otra parte, la sensación de "estafa" tan característica de las luchas ciudadanas contra el aumento de tarifas de la luz y el agua de las décadas anteriores, está también presente en la de 1983. Como se pudo apreciar páginas atrás, la ciudadanía en primera instancia se opuso a la instalación de medidores, no solo porque intuía que con ellos aumentarían las tarifas, sino también porque la población rebelde percibía que los funcionarios públicos adrede alteraban el monto de la energía consumida. Por ello, entre sus demandas incluyeron tarjetas de control sobre la lectura de los medidores.[132]

La huelga de pagos aparecía como la estrategia de lucha pacífica más eficaz en un contexto de creciente asimetría entre la ciudadanía y las gigantescas instituciones públicas. Pero en este movimiento se enfrentan dos grandes retos. El primero consiste en que su éxito depende de que la respuesta ciudadana sea abrumadoramente mayoritaria. En los cincuenta los "apagones simbólicos" constituían formas de cohesión ciudadana, mecanismos demostrativos de la fuerza del movimiento y, también, una estrategia política que permitía al liderazgo medir el grado de compromiso adquirido por la población. Una huelga de pagos que no cuente con un apoyo decididamente mayoritario, se convierte en blanco fácil de los cortadores de electricidad. Un grupo importante de la ciudadanía entregó sus recibos de luz a comités de vigilancia que recorrieron casa por casa solicitándolos, "no solo para entregarlos a las compañías sino para evitar que muchas personas que aun no tenían confianza en el movimiento pagaran sus recibos."[133] La recolección de recibos aparecía como un acto simbólico de fuerza y, a la vez, cumplía una función práctica, pues una vez que se convencía al usuario de entregarlo, debido al sistema de cobro, se aseguraba que este se mantendría en la huelga de pagos, aun cuando en el futuro tuviera la tentación de romper el compromiso adquirido. El acto de entrega de los recibos mostraba a la opinión pública y al gobierno la decisión de los huelguistas de

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

desconocer la legitimidad del cobro establecido negándose, rotundamente, al pago.

La centralidad del mensaje de "no pago" conduce al segundo reto de esta estrategia de lucha, que consiste en enfrentar exitosamente la capacidad de respuesta de la institución para ahogar la protesta: cortar la luz a los morosos. En la huelga de pagos de Cartago de 1962 una de las preocupaciones de los participantes era cómo mantener a los rebeldes usuarios con servicio eléctrico pese a la permanente embestida de los trabajadores del ICE a cargo de la desconexión, pues la electricidad en la vida citadina contemporánea es un servicio indispensable para resolver necesidades perentorias. Los ciudadanos morosos enfrentados a la carencia del servicio eléctrico podían desmoralizarse en pocos días y tomar la decisión de pagar el servicio. La labor de la reconexión ilegal tuvo gran importancia para mantener alta la moral de los huelguistas. En la huelga de 1983, también, se recurrió a la reconexión ilegal creando "equipos de reconectadores",[134] pero más importante fue la estrategia de impedir, mediante las barricadas, que se efectuaran desconexiones.

La ancestral vinculación de la mujer con la patria, como sinónimo de hogar compartido por sus integrantes, es recogida en una escena de las manifestaciones encabezada por el rótulo de "Paso Ancho presente en la lucha", y seguida por una multitud en la que sobresalen un grupo de mujeres que llevan de las cuatro puntas una inmensa bandera de Costa Rica.[135] En esta forma, los manifestantes se proponen presentarse ante la opinión pública como legítimos representes de la nación. Tradicionales concepciones de género, también, se reproducen en la movilización. Según Nardo Vanegas, al frente de las barricadas se encontraban especialmente hombres, en cambio, las mujeres tenían como función primordial brindar a ellos alimentación. De esta forma, en el momento culminante de la resistencia ciudadana, se reproduce en las calles de Hatillo la labor

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Ejemplar sin valor comercial

tradicional femenina de "amas de casa", mientras que los papeles protagónicos en las barricadas son asumidos por hombres.[136]

El ICE dio un nuevo empujón a la movilización al iniciar cortes masivos de electricidad, irrespetando a los "comités de vigilancia" compuestos, en buena medida, por mujeres. En esta forma el gobierno proveía a los huelguistas de un excelente argumento para efectuar bloqueos: detener los cortes de luz. El liderazgo del movimiento logró coordinar el bloqueo simultáneo de calles y carreteras en las más diversas regiones del territorio nacional.[137] Ante la amenaza de la paralización total del país el gobierno cedió. La decisión del ICE de cortar el suministro eléctrico a los morosos fue la medida que hizo que la ciudadanía organizada se lanzara masiva y espontáneamente a las calles.

Ya en años pasados las barricadas habían demostrado su efectividad. Según *La Nación* la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL) había puesto de moda las barricadas[138] y, en los años venideros, se convertirán en un típico mecanismo de protesta.

La dirigencia, al encontrarse frente a tan impresionante movilización ciudadana, se propuso evitar que el triunfo acabara con la organización popular y, para ello, ideó la creación de un frente de lucha permanente en contra del alto costo de la vida.[139] Pero una vez que se logró la exitosa negociación, la ciudadanía se replegó. Sostiene José Manuel Valverde que a partir de entonces se efectuaron aumentos menos violentos sin que hubiese una fuerte oposición de la ciudadanía.[140] Sin embargo, los incrementos de tarifas anunciados no volverían a alcanzar exorbitantes proporciones.[141]

Inmediatamente después del triunfo, los sectores de la izquierda vieron en esta movilización el inicio de una nueva etapa en los movimientos sociales. Un año más tarde las opiniones eran más mesuradas. Pese a las intenciones del liderazgo de mantener la llama de la rebelión encendida, una vez alcanzado

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

el triunfo, la desobediencia civil que conmovió a todos los rincones de la nación fue seguida por la desintegración de las organizaciones creadas al calor del movimiento. En los años venideros se experimenta un profundo debilitamiento de las organizaciones comunales y cívicas. Cuando la izquierda débil y dividida pierde su tradicional capacidad de convocatoria, no se han constituido sujetos con capacidad de asumir el vacío dejado por su liderazgo. Sin embargo, como se verá en el siguiente apartado, la herencia de la tradición de sus luchas, en alguna medida, subsiste en el presente.

LA MOVILIZACIÓN CIUDADANA DEL AÑO 2000

En marzo del 2000 conmovió el territorio nacional una inmensa movilización cívica en contra de un proyecto de privatización encubierta del sector de la energía y de las telecomunicaciones. En estas páginas se analiza la movilización del 2000 con el fin de comparar las formas de protesta ciudadana relacionadas con los servicios públicos en el período del estado de bienestar y en el proceso de expansión del estado neoliberal. En el año 2000 ¿son totalmente novedosos los instrumentos de protesta? ¿se nutre esta movilización de una tradición ciudadana constituida en la segunda mitad del siglo XX? La magnitud de la protesta, la amplia participación que en esta tuvieron las organizaciones sociales predominantes en la actualidad y su legitimidad ante la mayoría de la ciudadanía que obligó al gobierno a echar marcha atrás con el proyecto, convierten esta lucha en un terreno ideal para el análisis de los movimientos sociales contemporáneos en el país.

En estas dos décadas de políticas neoliberales, los organismos internacionales insisten en la privatización de los servicios públicos, supuestamente necesaria en aras de mejorar los índices macroeconómicos del país.[142] Pero la política de privatizaciones se

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

ha llevado a cabo solo parcialmente debido a la oposición ciudadana, especialmente manifiesta cuando se trata de empresas que han mostrado ser eficientes y rentables. En estos veinte años de experiencia neoliberal han surgido nuevas contradicciones entre el Estado y la ciudadanía. El destino del capital público acumulado en las empresas estatales, se convierte en uno de los nuevos focos de disputa. Si bien en décadas anteriores una buena parte de las rebeliones comunales y regionales se dirigieron contra la expansión de las empresas de servicios en manos del gobierno central, la ciudadanía había aceptado el discurso del estado benefactor, que presentaba el capital público como patrimonio de todos los costarricenses. Los esfuerzos de los funcionarios públicos para convencer a la ciudadanía de los beneficios de la privatización de empresas o negocios que, en manos del Estado, han resultado eficientes, no han dado los frutos esperados.

La lucha del año 2000 está vinculada con el desprestigio creciente de los políticos, un factor que no es novedoso en América Latina, pero que, especialmente en la década de 1990, se ha agravado, afectando negativamente a las democracias. La clase política es una expresión que se refiere a los políticos que, distanciados de la sociedad civil, sistemáticamente utilizan los bienes del estado para beneficio personal. En Costa Rica la lucha del 2000 está acompañada de una radical crítica a la clase política por parte de la ciudadanía. Esta se rebeló porque la fusión Estado-empresa privada expresada en la ley de modernización del ICE conocida como "combo", no solo posibilitaba el desarrollo del negocio de la electricidad en manos de políticos que ya incursionaban en este, sino que también convertía al ICE en una especie de "cascarón al servicio de los empresarios". Es decir, la multimillonaria inversión en la institución realizada con fondos públicos sería apropiada por empresarios privados entre los que figuraban políticos y, en relación con las comunicaciones, era predecible que empresas transnacionales lucraran

EDITORIAL UCR
Fiemolar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

de los bienes del Estado, monopolizando el mercado en detrimento de los consumidores. El proyecto daba libertad a las empresas para desarrollar proyectos en las cuencas hidrográficas ubicadas en las áreas protegidas por lo que con este se abrían las puertas para la expoliación incontrolada de los recursos naturales.[143]

Como lo vimos en los capítulos anteriores, la sospecha de que las autoridades manipulaban los precios de los servicios en detrimento de los consumidores estuvo presente, en general, en todas las luchas alrededor de los servicios públicos. La desconfianza en torno a la lectura de los medidores la encontramos en las movilizaciones analizadas. A ese temor ciudadano al incremento de precios de los servicios se sumaba la generalizada sensación de "estafa". De acuerdo con el sentido común de la ciudadanía, de alguna manera los agentes del Estado se las ingeniaban para inflar los recibos de los usuarios y, por ello, el control de los medidores se convertía en una importante demanda en las movilizaciones en pro de la disminución de los precios de los servicios públicos. Si bien hubo críticas a los elevados salarios de los burócratas y al excesivo lujo de sus centros de trabajo, no se encuentra en las movilizaciones estudiadas un discurso directo que les incrimine como usurpadores que se apropian en su propio beneficio del dinero de los usuarios. Ello cambia sustancialmente durante la lucha contra el "combo". El término "clase política" expresa el distanciamiento de los agentes del Estado de la sociedad civil por su violenta capacidad de tomar decisiones de espaldas a la sociedad civil y, en particular, de enriquecerse lucrando con los bienes públicos.[144] Efectivamente, la vieja sospecha ciudadana de que los políticos lucran de los bienes públicos ahora se percibe con certeza. Fue durante la huelga de educadores de 1995, a raíz de la precipitada aprobación de una nueva ley de pensiones, que reducía drásticamente los beneficios del retiro de los trabajadores inscritos en el régimen del Magisterio, cuando claramente se identificó a

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

los políticos como una clase.[145] La movilización de maestros se enfrentó ante un nuevo fenómeno político: el pacto Calderón-Figueres que simboliza el fortalecimiento de los políticos como clase y su consiguiente alejamiento de la sociedad civil. A partir de entonces los políticos podían, además de aprobar la polémica ley, prescindir de la sanción de la sociedad civil.[146]

La lucha del 2000 rápidamente adquirió carácter nacional, no solo porque un proyecto privatizador incumbía a todos los ciudadanos, sino en especial porque se trataba de una institución que estos perciben como propia. Esto permitió a su dirigencia enfrentar exitosamente al Estado. Al igual que en 1983, la amplia participación civil que se expandió por todo el territorio nacional fue el factor que obligó a la clase política a ceder.

No era este el primer proceso de privatización que se iniciara con las empresas de CODESA, pero ahora se tocaba un delicado punto de referencia de la identidad compartida por la ciudadanía costarricense. Por esta razón los manifestantes identificaron la defensa del ICE con la defensa de los valores nacionales[147] y, en particular, esta lucha implicaba un sentido de pertenencia compartido hacia una institución creada por el conjunto social, es decir, con "el sacrificio y esfuerzo de muchas generaciones de costarricenses, para construir esta institución como para sostenerla."[148] El Estado se apropió del nacionalismo presente en las luchas relacionadas con la nacionalización eléctrica y transmitió ese sentimiento de *lo nuestro* a la ciudadanía. Sin embargo, ese sentimiento compartido de que "el ICE es nuestro" no se generaliza a otras instituciones públicas. El ICE es expresión del éxito del proyecto democratizador del Estado costarricense, pues se trata de una entidad que ha sido capaz de llevar adelante impresionantes obras de desarrollo hidroeléctrico y de telecomunicaciones y, a la vez, de ofrecer un buen servicio a bajo costo aun en regiones del país que empresas privadas descartarían por no ser suficientemente rentables.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

En las luchas ciudadanas de la segunda mitad del siglo XX los participantes se proponen mostrar la capacidad de la colectividad de mantener algún nivel de control sobre los precios de los servicios. Al iniciarse la movilización del 2000, el obispo de San Isidro advierte que si se aprueba este proyecto es posible prever incrementos en las tarifas de luz y teléfono de hasta un 400 por ciento.[149] *Universidad* dedica varios de sus artículos a mostrar los perjuicios de la privatización en otros países de América Latina, perjuicios que reflejan los temores tradicionales de la ciudadanía: deterioro del servicio, mala atención de la empresa a los usuarios y, especialmente, precios que escapan a la incidencia de la protesta ciudadana. La empresa privada no comparte los intereses políticos de la clase gobernante a la que, al menos, la necesidad de mantener algún nivel de legitimidad la obliga a tomar en cuenta los intereses ciudadanos. De tal forma, sostiene *Universidad*, que en países donde se han privatizado los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, "la gente está harta de ser mal atendida, de empresas cuya lógica es dar lo menos posible y tomar lo más que se pueda."[150] La privatización conduciría a la total incapacidad ciudadana de incidir en la calidad y en los precios de los servicios.

En el año 2000, la participación ciudadana estuvo mediada por su pertenencia a sindicatos, así como a diversas organizaciones de nuevo cuño con demandas específicas. La Liga Cívica se constituyó para cohesionar un movimiento integrado por organizaciones ecologistas, feministas, estudiantiles, pastorales y comunales, quienes durante la movilización conservaron su adscripción a dichas colectividades. En efecto, las identidades sectoriales se mantuvieron, no se disolvieron como en luchas ciudadanas precedentes, en el concepto de "ciudadanía" o de "pueblo." Esta movilización se caracterizó por la diversidad de sectores sociales participantes y "por la carencia de una cabeza única y de una organización centralizada."[151]

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR Ejemplar sin valor comercial

No existió el liderazgo comunitario de base que alimentara las protestas hasta inicios de los ochentas, ni tampoco un liderazgo de la izquierda ubicado en organizaciones comunales clave, capaces de hegemonizar movilizaciones vecinales, como ocurrió en 1983. En esta lucha las organizaciones comunales que han perdido el eje articulador de la izquierda, no tendrán el protagonismo de sus predecesoras. Sin embargo, líderes veteranos de la izquierda como Sigifredo Méndez y Carlos Molina ofrecieron al movimiento su experiencia organizativa.[152] La tradición de las luchas de la izquierda recogida por militantes, sindicatos y estudiantes, se hizo presente en una de las consignas más escuchadas: "El pueblo, unido, jamás será vencido."[153]

El liderazgo del diputado José Merino del Partido Fuerza Democrática, representativo de la nueva izquierda, fungió como eje articulador, aunque no existía una izquierda con la capacidad de hegemonizar organizaciones de base. La decisión con que Merino se enfrentaba con sus compañeros diputados lo convirtió no solo en líder, sino también en el símbolo de resistencia contra el "combo". Se podría argumentar que Otto Guevara también asumió un importante papel como diputado opositor al proyecto, criticando sus "aspectos turbios." Sin embargo, a diferencia de Merino, defendía la privatización de las empresas públicas, pero con "transparencia ética" y, por ello, Guevara expresaba las inquietudes de los sectores de derecha que cuestionaban la forma, pero no el proyecto. En ese sentido el espíritu de la movilización en la lucha contra la privatización, estuvo, especialmente, representado en la figura de Merino. Sin embargo, Guevara era apoyado por un sector significativo de la sociedad civil y ello se reflejó en los resultados electorales del 2002. De tal forma encontramos dos sectores opositores al proyecto. No obstante, es el que se opone a la privatización del ICE el más combativo y, por ello, el que encontramos en las calles, desafiando al poder. El segundo, expresión de una opinión pública más pasiva, se opone al poder desmedido de la clase política, pero no solo está dispuesto a

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

aceptar, sino que incluso considera conveniente la privatización de las empresas de servicios públicos con el fin de allanar el camino a la integración del país al proceso globalizador.[154]

La centralidad de la Asamblea Legislativa como escenario de lucha, la importancia de la participación estudiantil y la rebeldía cívica que por semanas puso en jaque al Estado, condujo a miembros de la comunidad universitaria a comparar recurrentemente esta movilización con la ocurrida contra Alcoa.[155]

A diferencia de las movilizaciones cívicas analizadas en los capítulos anteriores, la lucha del 2000 contó con la participación de un importante sector de la Iglesia que la dotó de legitimidad y enriqueció el discurso movilizador convencional con una dimensión sagrada. El obispo de San Isidro de El General Monseñor Ignacio Trejos, una de las primeras voces de protesta, señalaba que en aras de alcanzar la vida eterna, era necesario asumir "con decisión y valentía nuestras responsabilidades personales y comunitarias."[156] Pero Trejos no representaba la voz oficial de la iglesia. Monseñor Román Arrieta, en las agudas coyunturas de enfrentamiento, ofreció un decidido apoyo al proyecto.[157]

La importancia de la participación sindical, la posición del capital que favorecía el proceso de privatización y la apertura de nuevas y prometedoras posibilidades de inversión con el "combo" contribuyeron a polarizar la relación entre la sociedad civil y el capital.[158] Las luchas civiles precedentes analizadas en este artículo, no fueron asumidas por el capital como luchas que debía encarar directamente. La calidad y el costo de los servicios públicos más bien constituyeron demandas que contribuían a cimentar alianzas entre sectores sociales provenientes de diversos estratos. Incluso en aquellas de carácter regional como la que se vivió en Cartago a inicios de los sesentas, el capital tuvo una participación protagónica. Mientras la clase empresarial veía en la movilización del año 2000 la vía hacia el caos y la consiguiente pulverización del poder, la página de opinión de *Universidad* expresaba el sentimiento de impotencia

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

frente a un Estado que se tornaba más poderoso y distante de los rebeldes ciudadanos cuando sostenía que "todos somos discapacitados frente a la indiferencia del gobierno [y] la incompetencia de la administración pública..."[159] El temor siempre presente en las movilizaciones ciudadanas de que el Estado se erija en fuerza totalmente consolidada frente a la ciudadanía se expresaba en las luchas contra pequeños aumentos de servicios públicos y, en el caso del agua, en contra de su traspaso de la municipalidad al gobierno central. Este temor en el 2000 adquirió centralidad en el discurso contestatario convirtiéndose en tema de cotidiana discusión.

Con manifestaciones masivas y bloqueos de vías públicas se intentó sitiar al gobierno. Pero hacer efectiva esta estrategia demandaba mantener un elevado nivel de apoyo por parte de la opinión pública, una labor difícil por cuanto los principales medios de comunicación estaban mayoritariamente a favor del proyecto. Pese a ello la lucha en el terreno de la interpretación de los acontecimientos fue ganada por los rebeldes ciudadanos. El gobierno sostenía que la masiva asistencia a las marchas era resultado de la manipulación de "buenos, pero no muy inteligentes" costarricenses.[160] Sin embargo, los líderes de la protesta lograron que la opinión pública leyera la coyuntura política de acuerdo con su propuesta interpretativa, es decir, que la masiva asistencia a las marchas expresaba reclamos legítimos en la vida democrática cuando los gobernantes se atrevían a abusar de su poder o a imponer sus proyectos contra la voluntad del pueblo.

Estrategias de lucha como las "barricadas" resultaron muy efectivas en 1983 y también en el 2000. Si bien en 1983 la fuerza pública no actuó para reprimir a los bloqueadores, en el 2000 los manifestantes se encontraron frente a un Estado decidido a aplicar la fuerza frente a este ya típico mecanismo de protesta. Entonces, se hizo necesario responder a la represión, agilizando esta estrategia de tal forma que, una vez la policía

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

ingresara a abrir la vía por la fuerza, los movilizados tuvieran la agilidad de reproducir el bloqueo en otras vías del país.[161] También se reeditaron las movilizaciones de grandes contingentes de manifestantes que culminaban en un mitin público. Pero en esta ocasión el número de participantes superaba inmensamente al de los movimientos precedentes. Si bien el teatro de acción de estas marchas se había concentrado frente a las instituciones de servicios públicos, en el 2000, además de los frecuentes mitines frente a oficinas del ICE, cuyo valor simbólico fue clave en la consolidación de la protesta, un escenario central de acción lo constituyó la Asamblea Legislativa, donde se jugaba el destino del ICE y se concentraba buena parte de la llamada clase política que se definió unánimemente por los manifestantes como corrupta.

Esta lucha ha tenido efectos acumulativos que se han reflejado en el panorama electoral: hubo un impresionante crecimiento de los partidos emergentes en las elecciones del 2002.[162] Los analistas creyeron ver en el "combo" un parte aguas en el que un movimiento social que parecía dormido despierta, dotando de vitalidad a la ciudadanía y transformando así la cultura política nacional. Según el sociólogo Allen Cordero, en esta lucha "hubo un salto significativo en materia de participación ciudadana... en el ánimo de las personas queda el sentimiento de que con estas formas de participación se pueden alcanzar cosas." De acuerdo con la psicóloga Carmen Caamaño, "se ha abierto un canal muy importante para que las personas puedan manifestarse de una manera más simétrica y de relacionarse con las autoridades de una forma más directa."[163]

Esta movilización precisamente tuvo lugar al cumplirse los 30 años del movimiento estudiantil que marcó la época de mayor actividad política del estudiantado de la Universidad de Costa Rica: la lucha contra ALCOA, una empresa transnacional a la que la Asamblea Legislativa concedía la explotación de bauxita. El semanario *Universidad* con el fin de conmemorar los 30 años

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
Ejemplar sin valor comercial

de la lucha contra Alcoa, organizó un foro con un selecto grupo de académicos que fueron partícipes de esta movilización estudiantil. Entonces, ALCOA fue vista a la luz del Combo. De acuerdo con los participantes, la lucha contemporánea anunciaba transformaciones significativas en las nuevas generaciones.[164] Prevaleció la sensación de que un cambio sustantivo ocurría en la identidad de la juventud universitaria. Esta de repente parecía superar la superficialidad, el consumismo, el desinterés por los problemas nacionales que la generación de ALCOA le ha atribuido para crear una nueva cultura política comparable a la que surgió en la década del 70, cuando el casco central de la universidad se convirtió en espejo viviente (mediante la circulación de libros, afiches, colecciones de fotos, discursos políticos improvisados, entre otros) de la vida política del país y del resto de América Latina. En este contexto Eva Carazo afirmó que "de ahora en adelante habrá un compromiso serio con el país"[165] Reafirmaba sus palabras el semanario *Universidad* cuando anunciaba que con esta movilización surgían "fuerzas emergentes" llamadas a canalizar el descontento social.[166]

No hay duda de que esta lucha anuncia cambios significativos en la protesta ciudadana costarricense. La movilización contra el "combo" significa un punto importante de transformación de las luchas ciudadanas, pues en esta, los llamados nuevos movimientos sociales constituyen uno de sus ejes motores. Además, como se ha analizado páginas atrás, en ninguna de las movilizaciones ciudadanas precedentes, ni siquiera en aquellas dirigidas por la izquierda, se había llegado a desarrollar un discurso directamente dirigido contra la "clase política". Si bien el tema del neoliberalismo y del proceso de privatización ya estaba presente en otra movilización de alcance nacional: la de 1983, esta es la primera convulsión social de gran magnitud dirigida directamente en contra del proceso de privatización. Sin embargo, cuatro años después, se podría apuntar que no han ocurrido los cambios cualitativos en la cultura política ciudadana que durante la movilización los analistas creyeron percibir.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

CONCLUSIONES

Las luchas ciudadanas analizadas en este artículo obligan a cuestionar el supuesto carácter "pacífico" y "conformista" de la población costarricense. A inicios de los sesenta se desencadena una serie de luchas por la nacionalización eléctrica, el costo de los servicios de agua, electricidad y transporte y en protesta por el traslado del control del agua de manos de la municipalidad al gobierno central. Sin embargo, también en estas páginas se ha podido apreciar que una vez que el entusiasmo de la rebeldía cívica queda atrás, el mundo parece volver a su orden habitual y los cambios acumulativos en la cultura política que se presagiaron durante los momentos culminantes de la rebelión no se concretizan o bien se quedan cortos en relación con las expectativas de la movilización. La rebelión ciudadana del año 2000 agudizó el sentimiento compartido de decepción hacia la clase política y con ello creó nuevas expectativas electorales. No obstante, el principal reto que plantea esta lucha: la transformación cualitativa en la relación entre la ciudadanía y la clase política, hoy en día aún parece un sueño distante. En las movilizaciones barriales promovidas por las Juntas Progresistas y, en las décadas de 1970 y 1980, también por las Asociaciones de Desarrollo, encontramos a los habitantes de los barrios citadinos dispuestos a desafiar el orden cuando perciben que las medidas del Estado o de empresas privadas perjudican sus condiciones de vida. Así mismo, estos vecinos se integraron a movilizaciones de alcance regional e incluso nacional cuando encontraron que compartían los mismos agravios con amplias mayorías. La rebeldía ciudadana, en las coyunturas más agudas, ha adquirido la fuerza necesaria para poner en jaque al gobierno central. No obstante, una vez que la ciudadanía movilizada pacta con los representantes del Estado, la ira colectiva se disipa y el mundo vuelve al orden habitual.

Esto significa que las movilizaciones colectivas no alcanzan efectos acumulativos en la cultura política que conduzcan a la

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

consolidación de una ciudadanía fortalecida permanentemente frente a sus representantes estatales. De tal forma, en el mediano plazo, las grandes movilizaciones distan de llenar las expectativas que en sus momentos de auge, generan en su liderazgo y en la intelectualidad. El liderazgo, compuesto mayoritariamente, hasta inicios de los ochentas, por integrantes de la izquierda tradicional, el PVP, se caracterizó por mantener una relación patriarcal con sus bases. Este concentró la iniciativa y, mediante el trabajo político cotidiano con la ciudadanía, es decir, el "trabajo de hormiga", encontró coyunturas en que fue posible generar protestas masivas. Pero una vez que los "momentos jacobinos" pasaban, los líderes de base vieron a los activos ciudadanos participantes volver a su vida anterior.

No obstante, sería un craso error creer que estas movilizaciones pasan sin dejar rastros en la cultura política. Las olas de protesta han contribuido a crear marcos de relación entre el Estado y la sociedad civil y, por ello, han tenido efectos acumulativos en la calidad y valor de los servicios públicos. Frente a las recurrentes protestas por la centralización del servicio del agua, los gobernantes se han visto obligados a responder impulsando el mejoramiento de la red de acueductos y alcantarillados. Las movilizaciones por los incrementos de precios de la electricidad no solo hicieron retroceder a los representantes estatales en el monto establecido, sino que también constituyeron una advertencia acerca de la necesidad de considerar el efecto político de aumentos considerados excesivos por la ciudadanía. Gracias, en buena medida, a las luchas comunales y regionales por el servicio del transporte público, el país ha presenciado en los últimos decenios un mejoramiento sustantivo de la calidad de la flota de autobuses. Finalmente, es necesario subrayar la existencia de una tradición de rebelión ciudadana que se expresa en las relaciones entre el liderazgo y sus bases, en las formas de protesta y en los agravios compartidos capaces de llevar a la toma del espacio público.

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

EDITORIAL
UCR
Ejemplar sin
valor comercial

EDITORIAL
UCR
#QuedateEnCasa

NOTAS

1 Esta artículo rescata las conclusiones del proyecto "Movimiento comunal y Estado en Costa Rica" que se llevó a cabo gracias al apoyo de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Silvia Durán, asistente en este proyecto, tuvo una importante contribución en la difícil tarea de recolectar de la documentación.

2 Alain Touraine. *Crítica de la modernidad,* Madrid, Ediciones Temas de Hoy, S.A., 1993, p. 434.

3 El tema que analizamos en este texto ha sido poco explorado. Entre las escasas investigaciones destaca el trabajo de Jorge Cayetano Mora. *Juntas Progresistas. Organización autónoma costarricense. 1921-1980.* San José, Fundación Fredrich Ebert, 1991. Sin embargo, existe una amplia bibliografía sobre organizaciones y movilizaciones sociales centrada especialmente en el sindicalismo. Puede consultarse al respecto: Carlos Abarca. "Luchas populares y organización obrera en Costa Rica (1950-1960)", *Revista de Ciencias Sociales* marzo-oct., 1978; Marielos Aguilar. *Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica. 1943-1971.* San José, Editorial Porvenir, 1989; Manuel Rojas. "El desarrollo del movimiento obrero en Costa Rica: un intento de periodización". *Revista de Ciencias Sociales*, marzo-oct., 1978; véase también del mismo autor: "Un sindicalismo del sector público", en Juan Manuel Villasuso, editor. *El nuevo rostro de Costa Rica*, Heredia, CEDAL, 1992. Importantes trabajos históricos se realizaron, especialmente en la década de los ochentas y principios de los noventas, acerca del sindicalismo y las condiciones de vida de los trabajadores. Véase: Víctor Hugo Acuña. "Vida cotidiana, condiciones de trabajo y organización sindical: el caso de los zapateros en Costa Rica (1934-1955). *Revista de Historia*. Número especial, 1988; José Manuel Cerdas Albertazzi. "Los obreros en la época de la manufactura: sistemas y condiciones de trabajo en San José. 1930-1960". *Revista de Historia*. Número especial, 1996; Carlos Hernández. "Los inmigrantes de Saint Kitts: 1910, un capítulo en la historia de los conflictos bananeros costarricenses". *Revista de Historia*, enero-junio, 1991, N°. 23 y del mismo autor: "Permanencias y difuminaciones en el mundo del trabajo: una visión de la continuidad y el cambio en la tradición y las trayectorias laborales de los sastres costarricenses", *Anuario de Estudios Sociales*, vol. 25, 1999; Mario Oliva, *Artesanos y obreros costarricenses. 1880-1914*, San José, Editorial Costa Rica, 1985.

4 Norbert Lechner "¿Qué significa hacer política?", en Norbert Lechner, editor. *¿Qué significa hacer política?* Lima, DESCO, Centro de estudios y promoción del desarrollo, 1992.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

5 Al respecto puede consultarse, por ejemplo, entre la extensa obra de E.P. Thompson, *Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial*, Barcelona, Editorial Crítica, 1984. Estudios sobre su obra se encuentran en: Varios autores *Hacia una historia socialista,* Barcelona, Ediciones del Serbal, S.A., 1983.

6 José Manuel Cerdas Albertazzi, "El marco socio-urbano de los obreros manufactureros josefinos, 1930-1960", *Revista de Historia* N°. 29, 1994, p. 96.

7 Véase al respecto: Iván Molina y Steven Palmer, *Historia de Costa Rica. Breve, actualizada y con ilustraciones*, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1997, cap. 9; Hernán Alvarado, Manuel Argüello, Carlos Cruz, José Díaz y Enrique Gutiérrez, *De los empresarios políticos a los políticos empresarios. Taller de coyuntura*, Heredia, Oficina de Publicaciones de la Universidad Nacional, 1981, cap. 1; Alfredo Guerra Borges, "El desarrollo económico", en Héctor Pérez editor, *Historia General de Centroamérica*, Vol. 5, San José, FLACSO, 1994, pp. 57-67; Isabel Román, *¿Conciliación o conflicto? Luchas campesinas y democracia en Costa Rica*, San José, Editorial Porvenir, 1994.

8 Ver: Jorge Cayetano Mora, *op. cit.*

9 Por ejemplo, en febrero de 1967 se integra una Junta Progresista en Calle Morenos "sin distingos de color político, electoral o religioso... con el objeto de mejorar y velar por las distintas condiciones que afectan a la comunidad", Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR), Ministerio de Gobernación y Policía-Gobernación, N°. 38403, 7 de julio de 1967.

10 En 1957 las Juntas Progresistas consideraron urgente resolver en Barrio Luján los problemas siguientes: la carencia de entubamiento del Río Ocloro, foco de infección, la falta de servicio de cloacas y el abastecimiento de agua. "Serios problemas sanitarios hay en Barrio Luján", *Adelante*, 16 de marzo de 1957, p. 6. En 1959 en reunión de vecinos convocada por la Junta Progresista los vecinos de Sagrada Familia analizan el problema del crematorio de la basura, "Nuevo plazo concede a Municipalidad vecinos de Sagrada Familia", *La República*, 19 de noviembre de 1959, p. 15. Integrantes de la Junta Progresista de Las Pavas visitan al vice-ministro de Gobernación para exponerle el problema de vigilancia por el reducido número de policías con que cuenta N°. ANCR, Ministerio de Gobernación y Policía, 38403, 7 de julio de 1967.

11 Véase: "Puente para unir los barrios Cuba y Sagrada Familia es un objetivo por el que luchan las Juntas Progresistas respectivas", *Adelante*, 12 de octubre de 1958, p. 8.

12 "Obsequio navideño hará Junta Progresista de Cinco Esquinas", *La República*, 1° de diciembre de 1959, p. 4.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

13 Actas de la Junta Progresista de Granadilla, 19 de noviembre de 1980, p. 40.

14 *Ibid*., 26 de agosto de 1982, p. 99.

15 Jorge Cayetano Mora, *La organización comunal y Dinadeco. 1964-1987*, San José, Editorial Porvenir, 1989, p. 24.

16 Véase *Ibid*., cap. II.

17 Jorge Cayetano Mora, 1989, *op. cit.* p. 95.

18 Entrevista en Hatillo, 4 de setiembre de 2002.

19 Jorge Cayetano Mora, *op. cit*., 1989, p. 144.

20 El desgarramiento de estas agrupaciones, como se aprecia en el importante estudio sobre el tema de Roberto Salom, se inscribe en una coyuntura de crisis de las organizaciones de izquierda en Centroamérica y el Caribe.Concluye Salom que la crisis en el caso costarricense se encuentra en "el estilo y contenido del quehacer político... caracterizado por el dogmatismo, el sectarismo, el doctrinarismo y la prepotencia." Ver: Roberto Salom, *La crisis de la izquierda en Costa Rica*, San José, Editorial Porvenir, 1987 pp. 68-69 y 151. Jorge Rovira Mas da énfasis a las divergencias ideológicas en la explosión de la crisis. Mientras Manuel Mora defendía la tesis de que aún no existían condiciones revolucionarias, la tendencia de Humberto Vargas Carbonell y de Arnoldo Ferreto Segura "postulaban la exigencia de una actitud más enérgica y combativa", Jorge Rovira Mas, *Costa Rica en los años ´80*, San José, Editorial Porvenir S.A., CRIES, ICADIS, p. 134. Véase también Manuel Solís, "Fragmentación, proliferación y desaparición en la izquierda", *Aportes*, N°. 18, marzo-abril, 1984, pp. 48-49.

21 Entrevista del 6 de agosto de 2001, Universidad Nacional.

22 Según un artículo de la revista *Aportes*, Guapinol llevaba a cabo las siguientes actividades: publicación de un periódico comunal, fundación de una biblioteca, construcción de una cancha pública de baloncesto y voleibol y organización de la primera Escuela Nocturna del cantón. También Guapinol logró establecer un salón de juegos de ajedrez, ping pong y otros. Además, la organización combinó las tradicionales luchas contra el mal servicio de autobuses con actividades de solidaridad con "pueblos en proceso de liberación". Mediante exposiciones de arte y fotografía se proponía rescatar los "valores histórico-culturales del pueblo". "Grupo Guapinol: Historia, organización y lucha popular", *Aportes*, agosto-setiembre, 1982, pp. 25-26.

23 "VII Juegos Deportivos Nacionales: ¡Belén Campeón!" *Ibid*., enero-febrero, 1983, p. 40; "San Antonio de Belén. Un ejemplo para el deporte nacional" *Ibid*., febrero de 1990, N°. 63, pp. 42-43.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

24 Así, por ejemplo, el grupo Tunante en San Ramón montó en 1982 la obra Santa Cachucha, elaborada por la comunidad para criticar a los promotores culturales del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y afirmar el papel del liderazgo comunal. "Tunante. Una experiencia teatral en San Ramón", *Ibid.*, p. 31.

25 El concepto "identidad" lo tomamos de nuestra experiencia académica contemporánea, pero no aparece en estos artículos como vocablo de uso común. "La tertulia de Hatillo" N°. 32-33, en abril de 1987, pp. 33-35.

26 Véase por ejemplo: Luis Paulino Vargas "Crisis de los movimientos populares en Costa Rica", *Aportes* N°. 114, dic. 1996, pp. 1-4.

27 Véase: José Manuel Valverde, María Eugenia Trejos y Minor Mora, *Integración o disolución socio-cultural. El nuevo rostro de la política social*, San José, Editorial Porvenir, 1993.

28 Ver: "Apoyamos derogatoria del artículo 98", *Nuestra Voz*, diciembre 1965, p. 1.

29 *Adelante* 25 de agosto de 1957, p. 2.

30 "Protesta de AMC", *Ibid.*, 19 de octubre de 1958, p. 8.

31 Lola Luna, "Aspectos políticos del género en los movimientos por la sobrevivencia. El caso de Lima. 1960-1980", en Lola Luna y Mercedes Vilanova, compiladoras, *Desde las orillas de la política. Género y mujer en América Latina*, Universidad de Barcelona, 1996, p. 87.

32 Los cartistas consideraban que el esposo ideal era aquel que podía actuar como proveedor, protector e instructor de su esposa. Véase: Anna Clark, *The Struggle for the Breeches. Gender and the Making of the British Working Class*, University of California Press, Berkeley, Los Ángeles Londres, 1997, capítulo 14. Ver también: Karin Rosemblatt, *Gendered Compromises. Political Cultures and the State in Chile, 1920-1950*, The University of North Carolina Press, 2000, pp. 97-98.

33 Véase: Instituto de Investigaciones Sociales, *La población de Costa Rica*, Oficina de Publicaciones de la Universidad de Costa Rica, San José, 1976, p. 111.

34 "Es necesaria la acción de todas las mujeres para evitar el peligro de una nueva guerra civil", *Nuestra Voz*, 23 de abril de 1957, p. 3.

35 Un amplio análisis de este tema se encuentra en Virginia Mora, *op. cit.*, pp. 294-305. Puede consultarse también Barahona, *op. cit.*, p. 98; Ángela Acuña, T.II., *op. cit.*, p. 361; Eugenia Rodríguez, *op. cit.*, 2001, p. 234.

36 "En la década que va de 1985 a 1995 surge la mayoría de las organizaciones específicas de mujeres y espacios mujer/género en organismos mixtos..."

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

Lorena Camacho y Lorena Flores, "Un movimiento de mujeres en desarrollo", en Sofía Montenegro coordinadora, *Movimiento de mujeres en Centroamérica Managua*, Programa Regional La Corriente, 1997, p. 463.

37 "Dimensiones simbólicas del accionar político y colectivo de las mujeres en Chile. Una propuesta de lectura desde la construcción simbólica del género", en Lola Luna y Merdedes Vilanova, compiladoras, *op. cit.*, p. 105.

38 El concepto de sentido común es tomado de C. Geertz y expresa "suposiciones tan inconscientes que parece una parte natural, transparente e innegable de la estructura del mundo." Tomado de Ann Swidler "La cultura en acción: símbolos y estrategias", *Zona Abierta*, 77/78, 1996-1997, p. 143.

39 *Adelante*, 25 de agosto de 1957, p. 8; *Ibid.*, 1° de setiembre de 1957, p. 9.

40 "AMC emplaza a las dirigentes de las secciones femeninas de los partidos políticos", *Adelante*, 5 de octubre de 1952, p. 3.

41 Jorge Cayetano Mora, *op. cit.*, 1991, pp. 94-102.

42 José Manuel Cerdas, *op. cit.*, 1994, p. 117.

43 "Excesivo impuesto al agua", *La Nación*, 9 de abril de 1963, p. 35.

44 Según la Federación Nacional de Juntas Progresistas en su carta al presidente electo José Joaquín Trejos Fernández, para entonces existe un faltante de más de 100,000 casas en el país y, mientras el faltante de vivienda es de 10,500 casas anuales, solo se construyen y reparan 4,500 "Grave problema por falta de agua en Barrio Bolívar en esta capital", *Ibid.*, 16 de mayo de 1963, p. 39.

45 "Juntas Progresistas a Trejos: Contraproducente sería política de austeridad", *La República*. 17 de marzo de 1966, p. 11. "En el Plan Nacional [de Desarrollo] de 1969-72 se hace mención a la necesidad de construir en el país un mínimo de 19,000 viviendas anuales. Esto indica que el INVU construyó solamente un 7,38 % de las viviendas necesarias." Carmen Salazar y Roberto Pineda, "El Estado costarricense y las políticas sociales en vivienda y asistencia social. INVU-IMAS 1970-82", Tesis de Sociología, UNA, Heredia, p. 119.

46 De Eric Hobsbawn se toma el concepto de "invención de tradiciones." Pero mientras Hobsbawn refiere a tradiciones que afirman el poder hegemónico, este estudio se refiere a tradiciones de lucha social. Mientras las primeras, según Hobsbawn "descansan sobre ejercicios de ingeniería social que con frecuencia son deliberados", en este caso se trata de invención de tradiciones que responden a los requerimientos planteados por la protesta social que con frecuencia se improvisan en el escenario de enfrentamiento y, gracias a su éxito, se consolidan como estrategias de resistencia en movimientos sociales

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

posteriores. Ver: Eric Hobsbawm, "Inventando tradiciones", *Historias*, octubre-marzo, 1988, p. 14.

47 "Es ilegal el aumento de las tarifas eléctricas", *Adelante*, 31 de octubre de 1952, p. 1.

48 "Alianza de Mujeres contesta el mensaje de Paz Estenssoro", *Ibid*., 16 de noviembre de 1952, p. 3.

49 "Sigue adelante el movimiento de resistencia contra el alza injusta de tarifas eléctricas", *Adelante*, 12 de octubre de 1952, p. 1.

50 "El Servicio de Electricidad está obligado a consultar al Ejecutivo antes de dictar una resolución", *La Nación*, 20 de setiembre de 1952, pp. 1 y 14.

51 "¡Apagón general el martes 30 de setiembre", *Adelante*, 21 de setiembre de 1952, p. 1. También, *La Nación* anuncia el apagón: "Grupos de la capital organizando huelga de pagos de servicio eléctrico", 17 de setiembre de 1952, p. 1.

52 "Gran éxito tuvo el apagón contra el alza de las tarifas eléctricas", *Adelante*, 5 de octubre de 1952, p. 1.

53 "El alza desmedida de las tarifas eléctricas afecta nuestros presupuestos familiares", *Nuestra Voz*, setiembre de 1958, p. 1.

54 "A los vecinos del Barrio Cristo Rey", *Adelante*, 23 de junio de 1957, p. 3.

55 *Ibid*., p. 3.

56 Por ejemplo en el mitin del 15 de setiembre se menciona la participación de Brenes Castillo como representante de las Juntas Progresitas de Cartago. Esta es una de las pocas referencias a las provincias centrales. "Echandi por la nacionalización eléctrica", *Adelante*, 21 de setiembre de 1958, p. 1.

57 Concluye un articulista de *Adelante*, señalando que "por primera vez un pueblo en Costa Rica se unifica tan unánimemente para resolver un problema de interés común". "Huelga de no pago en los servicios eléctricos", *Adelante*, 14 de abril de 1957, p. 6.

58 "Hacemos llamamiento a costarricenses", *Ibid*., 21 de noviembre de 1962, p. 1.

59 Emilio Piedra, "Peligro de que se manipulen los movimientos comunales", *La República*, 15 de mayo de 1983, p. 11.

60 "Vapuleado por la fuerza pública. Ciudad de Cartago", *La Nación*, 27 de noviembre de 1962, p. 1.

61 "Carta abierta al presidente", Campo pagado, *La Nación*, 25 de noviembre de 1962, p. 23.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar de valor comercial

62 "No somos militaristas", *La Nación*, 28 de noviembre de 1962, p. 1. "Obliguemos al gobierno a rectificar sus errores", *Libertad*, 1° de diciembre de 1962, p. 1 y "Felicitan a la policía por disparar contra el pueblo cartaginés" *Ibid.*

63 "¡Que no se derrame más sangre de costarricenses inocentes!", *La Nación*, 25 de noviembre de 1962, p. 22.

64 Ver: "Alicate otra vez en Cartago", *La Nación*, 1° de noviembre de 1962, p. 14.

65 *Ibid*., p. 22.

66 "Rompen la calle para encontrar el agua vecinos de Cinco Esquinas de Tibás", *Adelante*, 12 de mayo de 1957, p. 6.

67 Ver: 2 de noviembre de 1962, *La Nación*, p. 19.

68 3 de noviembre de 1962, *Ibid*., p. 19.

69 25 de febrero de 1963, *Ibid*., p. 1; 26 de febrero de 1963, p. 1.

70 Son entonces frecuentes denuncias como la de doña Rita Zeledón de Aguilar, vecina de El Paso de la Vaca, un barrio pobre de San José, quien pagaba al año 117 colones y, en 1963 le corresponde pagar la astronómica suma de 497 colones. Estas cifras indican que el pago del agua consume para entonces una porción importante de los salarios de los sectores subalternos. "No permitiré que me corte el agua el SNAA", *Nuestra Voz*, abril de 1964, p. 3.

71 "Sobre aumento de tarifas SNAA formula una explicación", *La Nación*, 27 de febrero de 1963, pp. 1 y 23.

72 "Excesivo impuesto al agua" *Ibid*., 9 de abril de 1963, p. 35.

73 "La Columna", *La Nación*, 12 de mayo de 1963, p. 6.

74 *Ibid*.

75 "No nos cortarán el agua", *Ibid*., 17 de mayo de 1963, p. 4. Además afirma que, cuando se quejan por el monto, les exigen pagar diez colones para la revisión de los contadores de las lecturas.

76 Afirma el diputado Milton Gutiérrez que la gente pobre es la más prolífica y, por tanto, la que consume más agua. "Donde las dan las toman", *Ibid*., 22 de mayo de 1963, p. 1.

77 Según el gerente de SNAA para entonces hay 22,000 medidores en el área metropolitana y pronto saldrá una licitación por 13,000. "Lo mejor es tener medidores" *Ibid*., 24 de mayo de 1963, pp. 1 y 2.

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

78 "Brote peligroso de descontento se está gestando en la ciudad de Guadalupe" *Ibid*., 19 de mayo de 1963, p. 8. (El subrayado es nuestro).

79 "No permitiré que me corte el agua el SNAA", *Nuestra Voz*, abril 1964, p. 3.

80 "Estamos dispuestas a mantenernos firmes hasta el triunfo, dicen valerosas mujeres de López Ballar", *Ibid*., setiembre de 1964, p. 3.

81 "Con relación a cañerías se aproxima nueva crisis en Heredia", *Libertad*, 18 de enero de 1964, p. 3

82 "Muerte al SNAA decretaron...", *Ibid*., 18 de abril de 1964, p. 7.

83 "Barva quebró política del SNAA", *Ibid*., 13 de junio de 1964, p. 6.

84 "Hay descontento con el SNAA en Pérez Zeledón", *Ibid*., 27 de mayo de 1963, p. 54.

85 "El pueblo impidió que le cortaran la cañería", *Ibid*., 30 de mayo de 1964, p. 6.

86 "Junta Progresista de Pavas contra altas tarifas de SNAA", *La República*, 12 de abril de 1967, p. 5.

87 Guillermo Carvajal Alvarado y Jorge Vargas Cullel "El surgimiento de un espacio urbano-metropolitano en el Valle Central de Costa Rica: 1950-1980", *Anuario de Estudios Centroamericanos*, N°. 13, 1987, p. 82.

88 Véase, por ejemplo: "Mal servicio de autobuses en Barrio México", *Adelante*, 11 de agosto de 1957, p. 8.

89 "Enérgica protesta por mal servicio de autobuses en Hatillo 4", *La Nación*, 21 de febrero de 1963, p. 15.

90 "Carta abierta", 20 de julio de 1952, p. 4.

91 "Del Consejo Superior de Tránsito denunciase una extraña resolución", *Adelante*, 20 de abril de 1958, p. 3.

92 "Editorial", *Ibid*., 20 de enero de 1957, pp. 1 y 3.

93 "No estamos por la nacionalización de transportes", 3 de febrero de 1957, p. 1.

94 "Empresarios de autobuses contra aumento de tarifas" *Ibid*., 19 de mayo de 1957, p. 1.

95 "No estamos por la nacionalización de transportes", *Ibid*.

96 Jorge Cayetano Mora, *op. cit*., 1991, p. 88.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
UCR
Ejemplar sin valor comercial

97 *Ibid*., 1991, p. 90.

98 "Transportes caros", *Libertad*, 22 de diciembre de 1962, p. 3.

99 Jorge Cayetano Mora, *op. cit*., 1991, p. 91.

100 "Municipalización de los transportes de personas", *Nuestra Voz*, junio 1972, p. 1.

101 "Mujeres del pueblo", *Ibid*., diciembre de 1965, p. 1.

102 "Juntas Progresistas contra aumentos", *La República*, 8 de mayo de 1966, p. 16.

103 "200 autobuses falta en Costa Rica", *Ibid*., junio 1974, p. 1; "Noticias de Cartago, *Ibid*., p. 8

104 "Autobuses de 40 llevan 80", 13 de mayo de 1963, p. 11.

105 "En marzo el problema de los transportes podrá explotar cuando entren las escuelas", *Nuestra Voz*, febrero 1974, p. 2.

106 Véase, por ejemplo, Hernán Alvarado y otros, *op. cit*., capítulo 1.

107 Jorge Rovira Mas, *op. cit*., cap. 1. "El salario real cayó un 40 por ciento en esos años y el desempleo ascendió a un 10 por ciento"; Iván Molina y Steven Palmer, *op. cit*., p. 101.

108 Jorge Rovira Mass, *op. cit*., pp. 72-73.

109 Un extenso estudio sobre las políticas ensayadas por el gobierno de Luis Alberto Monge para superar la crisis se encuentra en: Jorge Rovira Mas, *op. cit*., capítulo 3.

110 Según un editorial del *Semanario Libertad* las tarifas de bus aumentaron de 1 colón a 2,50 colones, las camisas de 100 colones a 400, la electricidad y el agua se triplicaron. "La situación se hace insoportable", del 3 al 9 de junio de 1983, p. 5.

111 Ver por ejemplo: "Consejo de gobierno ordenó la reconexión de servicios", *La Nación*, 9 de junio de 1983, p. 4.

112 "La situación se hace insoportable", *op. cit.*

113 "ANDE se opondrá a aumento de tarifas de transporte público", *La República*, 30 de junio de 1983, p. 2.

114 Al respecto puede consultarse: José Manuel Valverde y María Eugenia Trejos, "Diez años de luchas urbanas en Costa Rica. (1982-1992)", *Revista de Ciencias Sociales* N°. 61, set. 1993, pp. 7-16.

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

115 "Crece movimiento contra aumentos de electricidad", *La República*, 1° de mayo de 1983, p. 3.

116 "Pueblo perdió la paciencia", *Libertad*, del 6 al 12 de mayo de 1983, p. 1.

117 "Bloqueada vía a Puriscal en protesta contra el ICE", *Ibid*., 8 de junio de 1983, p. 6.

118 Según *La Nación* el presidente Monge advertía que "la protesta era controlada por los comunistas con el único interés de obtener beneficios políticos". 10 de junio de 1983, p. 4.

119 "Consejo de gobierno ordenó la reconexión de servicios", *op. cit.*

120 "Arrecia lucha contra tarifas de luz", *Libertad*, del 3 al 9 de junio de 1983, p. 1.

121 "Levantaron barricadas" *Ibid*., 10 de junio de 1983, p. 3.

122 Entrevista en Hatillo, 4 de setiembre de 2002.

123 "Palmar Norte en pie de huelga de no pago de luz eléctrica", *Ibid*., 4 de mayo de 1983, p. 4.

124 "Firme huelga contra pago de tarifas eléctricas", *Libertad*, del 20 al 26 de mayo de 1983, p. 9.

125 Entrevista en el Alto de Guadalupe, 30 de marzo de 2001.

126 "Tarifas eléctricas: Del descontento a la lucha organizada", *Aportes*, 14-15, junio-setiembre, 1983, p. 17.

127 *Ibid*., p. 18.

128 José Manuel Valverde y María Eugenia Trejos, *op. cit*., 1993, p. 10.

129 "Gran manifestación contra altas tarifas", *Libertad*, del 13 al 19 de mayo de 1983, p. 3.

130 "¿Cómo organizarnos", *Nuestra Voz*, julio 1983, p. 9.

131 *Ibid*. "La situación es tan explosiva que con una persona que empiece a hablar en un bus, intervienen todos los pasajeros", *Libertad*, del 13 al 19 de mayo de 1983, p. 2.

132 En el proyecto de ley presentado por los huelguistas se retomaba esta vieja inquietud de la ciudadanía, proponiendo que "los encargados de la revisión de los medidores de consumo de electricidad y agua deberán entregar a usuario, en el momento mismo en que se realice la lectura, un copia del reporte [y] en caso de que se produzcan diferencias entre los recibos de cobro y la copia

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

entregada por el empleado al consumidor, prevalecerá esta última con el carácter de plena prueba." "Proyecto de Ley para responder a las demandas del movimiento popular", *Ibid.*, del 13 al 19 de mayo de 1983, p. 3. "Bajarán tarifas eléctricas" *La Nación* 10 de junio de 1983, p. 4.

133 "Pueblo perdió la paciencia", *op. cit.*, p. 17.

134 "Tarifas eléctricas: del descontento a la lucha organizada" *op. cit.*, p.18.

135 *Ibid.*

136 Entrevista del 2 de setiembre de 2002, San José.

137 Al pie de una de las fotos que muestra *Libertad* sobre las barricadas, se lee lo siguiente: "Barricadas y barricadas. Este espectáculo se repitió en muchos lugares del país." "Bloqueos detienen cortes de luz" del 10 al 16 de junio de 1983, p. 3.

138 "Editorial: la semilla de la anarquía", *La Nación*, 13 de junio de 1983, p. 14.

139 "Sigue lucha contra tarifas", *Libertad*, del 27 de mayo al 3 de junio, p. 8.

140 José Manuel Valverde y María Eugenia Trejos, *op. cit.*, p. 12.

141 "También aumentará el precio del consumo básico eléctrico", *La República*, 22 de noviembre de 1983, p. 3.

142 Véase: Iván Flores, "Reforma del estado costarricense y alternativas ciudadanas: el caso del ICE", *Reflexiones*, N°. 63, octubre 1997, pp. 41-50.

143 Véase: "Obispo contra apertura del ICE", *Universidad*, 19 de enero del 2000 p. 3; Adrián Jaen "La FEUCR y la privatización del ICE", *Ibid.*, 26 de enero del 2000, p. 18; "Reformas al ICE: Un combo que no logra afinar", 2-8 de febrero del 2000, *Ibid.*, p. 5; "A ganar las calles", 2-8 de febrero del 2000, p. 7; "Marchas y concentración hoy", http://www.nacion.com/ln_ee/2000/marzo/17/pais5html; "Encuesta telefónica de Demoscopía", http://www.nacion.com/ln_ee/2000/marzo/25/pais3.html

144 Alfonso González Ortega y Manuel Solís, *Entre el desarraigo y el despojo*, San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 2001, p. 432. Según Manuel Solís "el punto de apoyo más fuerte que tuvo el movimiento de marzo fue la experiencia repetida de actos de corrupción a todos los niveles de la administración pública, y junto a ella, la experiencia de impunidad". Manuel Solís, "Entre el cambio y la tradición: el fracaso de la privatización de la energía y las telecomunicaciones en Costa Rica". En: *Revista de Ciencias Sociales*, N°. 95, 2002, p. 39.

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

145 "Cámaras piden firmeza al gobierno", *La Nación,* 21 de julio de 1995, p. 4 A. Véase también, por ejemplo: "Efervescencia social al rojo vivo", *Idem*., 14 de julio de 1995, p.2; "Huelga... cada vez más fuerte", *La República*, 19 de julio de 1995, p. 3 A.

146 "Y el pueblo ganó las calles", Universidad, 27 de julio de 1995, p. 2. "Desde el inicio, flotaba en la conciencia colectiva de los trabajadores de la educación la idea de que lo que estaba en juego no era solamente su sistema de pensiones, sino la esencia misma de un régimen y unas reglas del juego considerados hasta entonces como democráticas, que estaban dejando de serlo..." Rogelio Cedeño, "La huelga magisterial de julio-agosto de 1995: Los trabajadores en lucha contra la exclusión y el hambre", *Abra* 21-22, segundo semestre, 1995, p. 120.

147 "Obispo contra apertura del ICE", *Universidad*, 19 de enero del 2000, p. 3.

148 "La FEUCR y la privatización del ICE", *Ibid*., 26 de enero del 2000, p. 18.

149 "Obispo contra apertura del ICE", *Universidad*, 19 de enero del 2000, p. 3.

150 "Hacerle caso a los nublados", *Ibid*., 2-8 de febrero del 2000, p. 3.

151 Entrevista con Danilo Pérez, *op. cit.*

152 Entrevista con Sigifredo Méndez en El Alto de Guadalupe, 30 de marzo del 2001; entrevista con Carlos Molina, Hatillo, 4 de setiembre del 2002.

153 "...el eco de 'el pueblo unido, jamás será vencido' aún resuena entre los costarricenses..." "Yo protesto, vos protestás... nosotros vencemos", *Universidad*, del 12 al 26 de abril del 2000, p. 9.

154 Véase por ejemplo: "Foro: El Combo del ICE: Lecciones aprendidas y alcances para la sociedad civil", *Aportes* 2000, p. 31.

155 "El Combo revive espíritu de Alcoa" *Ibid*., 22-28 de marzo del 2000, p. 3.

156 "Obispo contra 'apertura' del ICE", *Universidad*, 19 de enero del 2000, p. 3.

157 "Obispo y clero contra el Combo", *Ibid*., 23-29 de febrero del 2000, p.5; "Marcha mantuvo a comando de crisis en sesión permanente" http://www.nacion.com/ln_ee/2000marzo/24pais3htm1

158 "Cámaras piden firmeza a gobierno", *op. cit.*

159 Juan Figueroa Landi "La verdad de los bloqueos" *Universidad* del 5 al 11 de abril del 2000, p. 24.

160 Miguel Ángel Rodríguez, en su discurso del 23 de marzo dirigido a la Fuerza Pública, señalaba que los manifestantes estaban "equivocados, [eran] engañados

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

pero buenos costarricenses." "Gobierno vivió un día tenso" http://www.nacion.com./ln_ee/2000/marzo/24/pais3.html. Luis Alberto Monge hizo un llamado a los manifestantes para que verificaran sus ideas sobre el proyecto. *Ibid*.

161 "Gobierno y sindicatos intentan abrir diálogo por Combo", *op. cit*. http://www.nacion.com/ln_ee/2000/marzo/29/pais1.html

162 Sin embargo, las proyecciones de entonces fallaron en cuanto a las expectativas del partido que, por su papel protagónico en esta lucha, se esperaba obtuviera los mayores dividendos y haberla dotado de su líder más importante. Fuerza Democrática, desgarrada por luchas internas de poder no obtuvo un solo diputado mientras que el Partido Acción Ciudadana, bajo el liderazgo de Otón Solís, una figura pública que tuvo un papel poco visible en las movilizaciones, pero que capitalizó el descontento contra la clase política, obtuvo más de un 20 por ciento de los votos emitidos. Véase por ejemplo: "País reconoce labor de universidades", *Universidad*, del 12 al 26 de abril del 2000, p. 12.

163 "Yo protesto, vos protestás... nosotros vencemos", *Ibid*., del 12 al 26 de abril del 2000, p. 9.

164 "De luces y sombras", *Ibid*., del 5 al 11 de abril del 2000, p. 23.

165 "¡Despertó la juventud!", *Universidad* 5-11 de abril del 2000, p. 4. *op. cit*.

166 "La desobediencia civil gana fuerza", *Ibid*., 29-4 de abril del 2000, p. 4.

EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial
#QuedateEnCasa

EDITORIAL
UCR
Ejemplar sin
valor comercial

EDITORIAL
UCR
#QuedateEnCasa

ACERCA DE LA AUTORA

Patricia Alvarenga Venutolo. Catedrática. Obtuvo el bachillerato en la Universidad de Costa Rica, 1981. Maestría en Historia: Universidad de Costa Rica, 1986. Doctorado: Universidad de Wisconsin, Madison, EE.UU., 1994.

Desde 1986 es profesora e investigadora de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Entre sus publicaciones e investigaciones más relevantes están:

- "Las explotaciones agropecuarias en los albores de la expansión cafetalera" en *Revista de Historia*, Nº. 14, 1986.
- "La composición de la producción agropecuaria en el Valle Central Costarricense" en Revista de Historia, Nº. 16, julio-diciembre. 1987.
- "Crecimiento económico y crisis agrícolas. El abastecimiento de la ciudad de Cartago. 1700-1821" en: Luis Fernando Sibaja, compilador, Costa Rica Colonial, San José: Ediciones Guayacán, 1989.
- Los productores en la Costa Rica precafetalera. 1750-1840, San José, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1991.
- "Resistencia campesina y formación del mercado de bienes básicos. Cartago, 1750-1820", en Revista de Historia Nº. 31, enero-junio, 1995.
- Cultura y ética de la violencia. El Salvador, 1880-1932, San José, EDUCA, 1996.
- "Los marginados en la construcción del mundo citadino. El Salvador, 1880-1930", Revista de Historia (Nicaragua) Nº. 8, 1997.
- "Auxiliary Forces in the Shaping of the Repressive System: El Salvador, 1880-1930" en Aldo Lauria-Santiago y Aviva Chomsky compiladores Identity and Struggle at the

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa

Margin of the Nation State. The Laboring Peoples of Central America and the Hispanic Caribbean, Duke University Press, Durham and London, 1998.

- Conflictiva convivencia. Los nicaragüenses en Costa Rica Cuadernos de Ciencias Sociales, Nº. 101, Flacso, San José, 1997.
- "La identidad amenazada. Los costarricenses ante la migración nicaragüense", El observador económico. Nov. 1997, pp. 8-11.
- Trabajadores inmigrantes en la caficultura, Cuadernos de Ciencias Sociales, Nº. 116, Flacso, San José, 2000.
- De vecinos a ciudadanos. Movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica, en prensa, Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Junto con Elizabeth Fonseca y Juan Carlos Solórzano, Costa Rica en el Siglo XVIII, Colección Historia de Costa Rica, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2002.

EDITORIAL UCR
#QuedateEnCasa
EDITORIAL UCR
Ejemplar sin valor comercial

La licencia de este libro se ha
otorgado a su comprador legal.

Valoramos su opinión.
Por favor comente esta obra.

Adquiera más de nuestros
libros digitales en la
Librería UCR virtual.

LIBRERÍA
UCR
VIRTUAL

Este trabajo analiza el papel de la ciudadanía en las movilizaciones comunales, regionales y nacionales protagonizadas por una pluralidad de sectores sociales. Se trata de rescatar la historia de los ciudadanos que se organizan para incidir en la vida de sus barrios al mejorar las condiciones materiales, crear espacios de distracción, promover las "buenas costumbres" y, rebelarse ante los centros de poder cuando perciben que la indiferencia de las instituciones públicas afecta negativamente su calidad de vida. La expansión y centralización del Estado de bienestar generó movilizaciones sociales que trascendieron el nivel local para convertirse en regionales e incluso nacionales. Estas tuvieron objetivos disímiles, siempre orientados a incidir en las políticas públicas y a ganar espacios frente a un Estado en rápido proceso de expansión y centralización. Se concluye con un análisis de la lucha del año 2000 en defensa del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en perspectiva histórica, pues esta ofrece un buen punto de referencia para estudiar las transformaciones de la protesta ciudadana a partir de la década de 1980, cuando tiene lugar el viraje neo-liberal del Estado costarricense.

ISBN 978-9977-67-940-2

Universidad de Costa Rica
Escuela de Historia
Cátedra de Historia de las Instituciones de Costa Rica

EDITORIAL UCR